

CAPÍTULO 4

Dinámica de la guerra en el Control Institucional del Territorio en Colombia

TC. Martín Moreno Luis Antonio¹⁶

“La guerra permite definir, controlar y mantener el territorio en donde un Estado gobierna, y ello constituye la condición básica de la soberanía para el gobierno dentro de una sociedad por parte de un Estado”. (Patiño, 2012, pg. 7)

El propósito de este capítulo es analizar la dinámica de la guerra y el impacto de la misma en el Control Territorial ejercido por las Fuerzas Militares, frente a la proyección del Estado colombiano hacia las zonas de difícil gobernabilidad. Por ende, se navegará a través de la relación de dos aspectos fundamentales en los procesos de Control Territorial: la población y el territorio en escenarios irregulares. Particularmente, la dinámica del conflicto interno no obedece solo a una guerra de guerrillas surgida a partir de 1964 con el levantamiento de diferentes grupos insurrectos, sino a la continuidad de un proceso de construcción estatal, donde sus instituciones legítimas en pleno siglo XXI no se han establecido como soberanas en la totalidad del territorio.

Partiendo de este principio en el país la principal dificultad es que la basta accidentalidad geográfica no permite a lo político ajustarse dentro de los amplios espacios geoestratégicos ubicados hacia el exterior del núcleo vital¹⁷. En otras palabras, “en nuestro país no se ha ajustado lo político a lo geográfi-

¹⁶ Magister en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra Colombia. Alumno de la Maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, Colombia. Fue Instructor de la Escuela Militar de Cadetes en el grado de Teniente. Comandó el Batallón de Combate Terrestre No. 94 y Grupo Gaula Magdalena en el grado de mayor, actualmente es docente e investigador del Departamento Ejército de la Escuela Superior de Guerra. Integrante activo del grupo de investigación “Centro de Gravedad- Masa Crítica”. Contacto: martinl@esdegue.mil.co. Con publicación de artículos en la revista especializada Fuerzas Armadas, entre los que se destaca: “Ciberguerra. Nueva forma de hacer la guerra en el siglo XXI” (2016), así como “Cuando los Tanques no cuadran: Lecciones de una Revolución en Asuntos Militares en el período entre-guerras”.

¹⁷ Espacio de crecimiento adyacente al centro de poder, que por diferentes circunstancias no se han podido vincular política, geográfica y demográficamente al núcleo vital.

co [...]” (Bahamón, 1989, Pg. 23). En tal circunstancia la geografía colombiana se presenta como un obstáculo para salir del centro hacia las regiones de la periferia, limitando el progreso solo a una pequeña porción del territorio, afectando a su vez una gran parte de la población.

Para tal efecto, la tarea de centralización del poder para el Estado colombiano no ha sido fácil. Desde la época de independencia la historia muestra la alta incidencia de la violencia interna, resultado de la baja legitimidad estatal. Problemática que explica la fragmentación del espacio existente en algunas regiones geográficas del país, pues la influencia estatal no es permeable en la totalidad del territorio nacional. Por lo tanto, a través del monopolio legítimo de la fuerza el Estado ha buscado poco a poco ampliar el rango de segmentación de la soberanía, de esta forma las Fuerzas Militares se convierten en la punta de lanza de la proyección institucional en las regiones más apartadas.

Particularmente, el comienzo del siglo XXI es testigo de la dificultad del Estado para ejercer la soberanía con la continuidad de una guerra interna naciente a mediados del siglo pasado. Un detonante más de enfrentamientos violentos y guerras civiles por los que ha navegado el país, escenario de larga trayectoria donde hasta ahora, el contexto no ha cambiado mucho. Basado en lo anterior, ¿Cuál es la dinámica del conflicto interno colombiano en el Control Institucional del Territorio para la consolidación del Estado como unidad política soberana?

El Control Institucional del Territorio exige no solo la posición del Estado en todo el territorio, además la condición de seguridad de la fuerza pública con elementos de poder fuerte y otros que cuenten con la legitimidad propia de la población. En sí, población y territorio son el punto de partida dentro de los parámetros de Control Territorial, en el momento histórico de transición que vive Colombia para el desarrollo y la convivencia. Pues los conflictos de ahora, no solo superan una prueba de fuerza para poder imponer la voluntad del vencedor. Considerablemente en las guerras contra la insurgencia, ganar militarmente no será suficiente.

Específicamente, la ingobernabilidad, así como la deslegitimación de la autoridad del Estado son la manifestación de la naturaleza del conflicto armado en el interior del territorio. Motivos por los cuales “[...] una fracción de la población se alza en armas y emprende una lucha por la conquista del poder con la intención de establecer su propia figura de Estado, que —según sus propias ambiciones— restablezca la siempre cambiante noción de orden.” (Yaya, 2014, Pg. 55). De forma que el Estado pierde la legitimidad si no está donde el pueblo lo necesita, considerando entonces al suelo y la población como variables fundamentales del conflicto.

Entre tanto, hay una gran dependencia de la población para ejercer el Control Territorial, haciendo más supeditadas las instituciones estatales al apoyo popular. Sobre todo, los conflictos irregulares obligan al adversario a adherirse al resultado deseado del enfrentamiento, estableciendo condiciones y modificando intenciones. Entre los actores no estatales más relevantes que enfrenta el Estado colombiano se encuentra el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹⁸.

Para combatir esta insurgencia, el Estado ha empleado entre todos sus instrumentos, mayormente la estructura militar, que ha coadyuvado con gran efectividad en el establecimiento y consolidación del Control Territorial. De forma tal, el componente bélico ha existido especialmente sobre las últimas décadas no como elemento aislado sino como parte de las instituciones públicas, garantizando la legitimidad otorgada por la población.

Basado en lo anterior, se tomarán elementos referentes, diseñando una propuesta de análisis a partir de conceptos y teorías que interpretativamente permitan el acercamiento a valiosa información histórica que desprenda una aproximación en cuanto a la forma de llenar los persistentes vacíos institucionales del Estado en la totalidad del territorio nacional.

Para el abordaje teórico del presente trabajo investigativo a lo largo de este capítulo, son fundamentales las Teorías del Estado que definen la relación de

¹⁸ Grupo insurgente izquierdista con influencia ideológica marxista-leninista, establecido desde 1964, con el objetivo de forzar un cambio político derrocando el gobierno.

la guerra, con el Control Institucional del Estado en el territorio, como la Teoría belicista de Weber, Carlos Patiño y Till. Apoyada en el supuesto de la guerra como elemento fundamental en la construcción de Estado, lo que hace de esta actividad bélica un impulsor del desarrollo Estatal. Al tiempo son determinantes los conceptos de autores cuyos lineamientos teóricos han incidido positivamente en el ejercicio del Control Territorial por parte de las instituciones públicas estatales, como David Galula y Martin Van Creaveld con la asimetría de las nuevas guerras.

Guerra y formación del Estado en la dinámica del Control Institucional del Territorio

El país evidencia una alta inclinación a los conflictos internos, donde precisamente la búsqueda efectiva de la soberanía esclarece tal comportamiento. Específicamente, la legitimidad de la institucional estatal en el territorio es el principal objetivo de los países en vía de desarrollo¹⁹.

La soberanía exige la posesión del Estado en todo el territorio, parte de la nación misma al enmarcar lo que otros entes no pueden hacer dentro de sus propias fronteras, otorgando el poder al Estado de decidir sobre sí mismo.

No obstante, la alta degradación del poder coetánea en los países subdesarrollados hace inconcluso el proceso de construcción de Estado, pues el elemento estructurador del fortalecimiento estatal, conocido como poder soberano, se encuentra permeado por la violencia interna. Así, la soberanía hace al Estado y nace del individuo en sí, siendo delegada a los órganos del poder público para su ejercicio.

Pues bien, en Colombia el inconformismo de las gentes y la población marginada del centro de poder, hace que el país se dispute entre guerras civiles o conflictos internos haciendo difícil la búsqueda de la soberanía. Construyéndose un Estado que no tiene el control de la periferia, creando situaciones de tensión desde su misma independencia y en pleno siglo XXI la dife-

¹⁹ Son países tercermundistas, pobres, débiles y alta fragilidad interna.

rencia no es mayor. Pues desde la colonización sobre estos espacios territoriales se generó la resistencia de las clases oprimidas.

El mismo desprecio de las élites bogotanas sobre los vastos territorios conocidos como los confines del Virreinato²⁰ ha repercutido como un intermitente en el tiempo trayendo consigo la violencia interna. Los individuos sentados sobre estas tierras no existían ante los ojos de los gobernantes, fueron vistos como la escoria social. “Estos grupos de arrojados y libres de todos los colores que vivían sin Dios ni ley, fueron considerados [...] enemigos internos” (Colmenares, citado por Serje 2006, P. 145). Ello dejó en entredicho la acción del Estado pues solo fue hasta finales del siglo XX cuando se le empieza a dar importancia a estas regiones de la periferia.

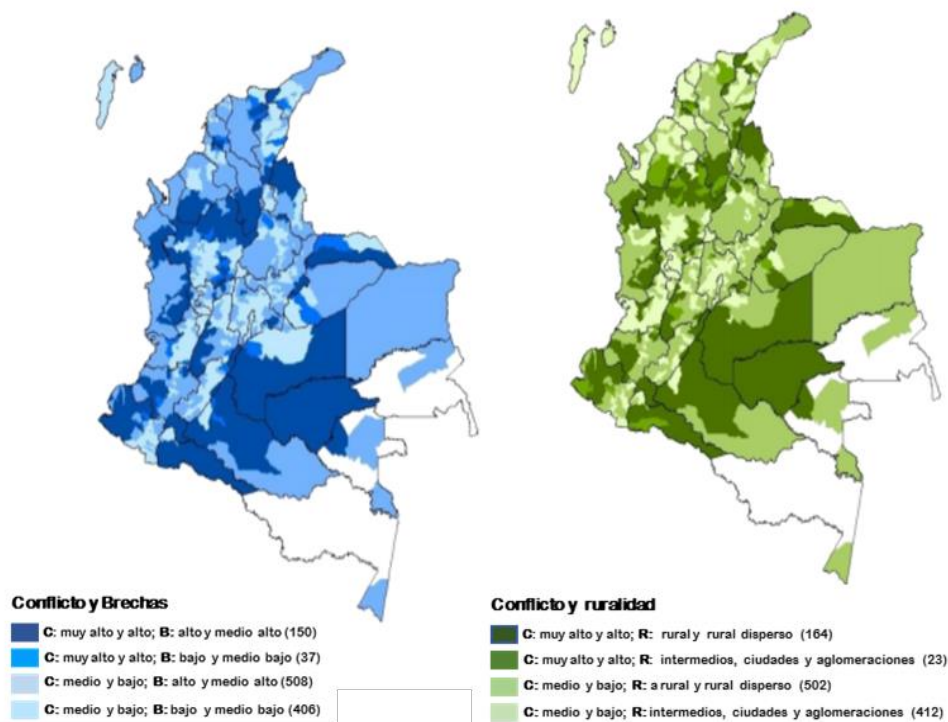
Prácticamente, es con la Constitución de 1991 que se cambia la categoría de territorios nacionales, estableciendo nuevas divisiones político - administrativas²¹. De acuerdo con Serje (2006, Pg. 22), solo hasta esa época fueron concebidos como departamentos, dependiendo del gobierno central. No obstante, esas regiones se han mantenido al margen de todo progreso y desarrollo.

El siguiente mapa elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación, evidencia la incidencia del conflicto en relación a las brechas socioeconómicas -izquierda- y la pobreza rural -derecha- mostrando el abandono de la periferia que para la segunda década del siglo XXI parece no mejorar desde hace más de un siglo.

²⁰ Más de la mitad del espacio territorial en Colombia carecía de importancia para las elites dirigentes en el centro del país. Motivaciones que llevan inclusive al Estado a entregar territorios a la empresa privada, como el caso de la casa Arana, tras la explotación del caucho esclavizó la población indígena, llevándolos casi a su extinción.

²¹ Con la Constitución del 91 se crearon 32 departamentos.

Gráfico 4. El conflicto entre las brechas socioeconómicas y la pobreza rural



Fuente. DNP 2015. Incidencia del conflicto con las brechas socioeconómicas y pobreza rural

Coincidentalmente la zona de mayor desarrollo y menor índice conflictivo se encuentra hacia el centro, contraponiéndose a las áreas rurales periféricas. La realidad anterior define el foco de inseguridad interna, donde “la relativa fragilidad estructural del sistema político parece obedecer a las dificultades para asegurar un Control Territorial global efectivo por parte del Estado [...]” (Torrijos, 2009, pg. 158). Por lo tanto, la satisfacción integral principalmente sobre la demanda de factores domésticos de inestabilidad conducirá a una acumulación exitosa de poder.

Dicho de otro modo, del desarrollo integral de estos departamentos con alto grado de exclusión, depende el control sobre la población, el desarrollo de la territorialidad y en absoluto, la construcción del territorio. Con ello, mate-

rializar en cierta forma la centralización del poder de Estado, cuyas instituciones se reservan el monopolio no solo de la violencia, sino del Control Territorial, la justicia, entre otros (Kaldor, 2001). Bajo esta perspectiva, el Estado amplificaría el grado de legitimidad en todo el territorio, en la medida que satisfaga las aspiraciones de sus habitantes.

Sin embargo, es importante entender el comportamiento de la territorialidad en la dinámica interna de conflictividad vivida en el país, comprendiendo así la complejidad del territorio, y poder en cierta forma formular estrategias de desarrollo del mismo en el contexto actual. En la persecución de este objetivo, nos remontamos a la dimensión temporal, retomando la necesidad de la construcción integral del territorio.

La historia muestra que el territorio es el resultado de la construcción, apropiación, transformación e indiferencias, producto de la desigualdad y desequilibrio de poder, se gesta en la guerra, en continuidad de años de violencia interna sobre los espacios fragmentados²². Así las cosas, Pataquiva (2009, Pg. 161-162) manifiesta el nacimiento de guerrillas rebeldes contra el régimen estatal sobre los sesenta, entre las más relevantes las FARC y el ELN; desencadenando una confrontación cada vez más crítica, pues sobre los ochenta extremistas de derecha combaten la izquierda, casi llevando al país a un Estado fallido.

Evidentemente hasta finales del siglo XX y aún en los tiempos actuales, la influencia superflua del Estado en ese gran espacio de desarrollo sobre la periferia, se manifiesta en una gran ola de violencia, agudizándose una guerra infernal en el vacío de estos territorios. Amplio espacio geográfico donde se sentaron según Serje (2006, Pg. 25), los residuos de una sociedad colonial sembrada a lo lejos de todo progreso, sufriendo ahora un proceso revertido de desplazamiento por la afectación de la violencia desenfrenada y la lucha frontal contra las drogas.

²² Regiones donde existen poderes defactos de los alzados en armas, cuya arbitrariedad favorece el dominio sobre el individuo.

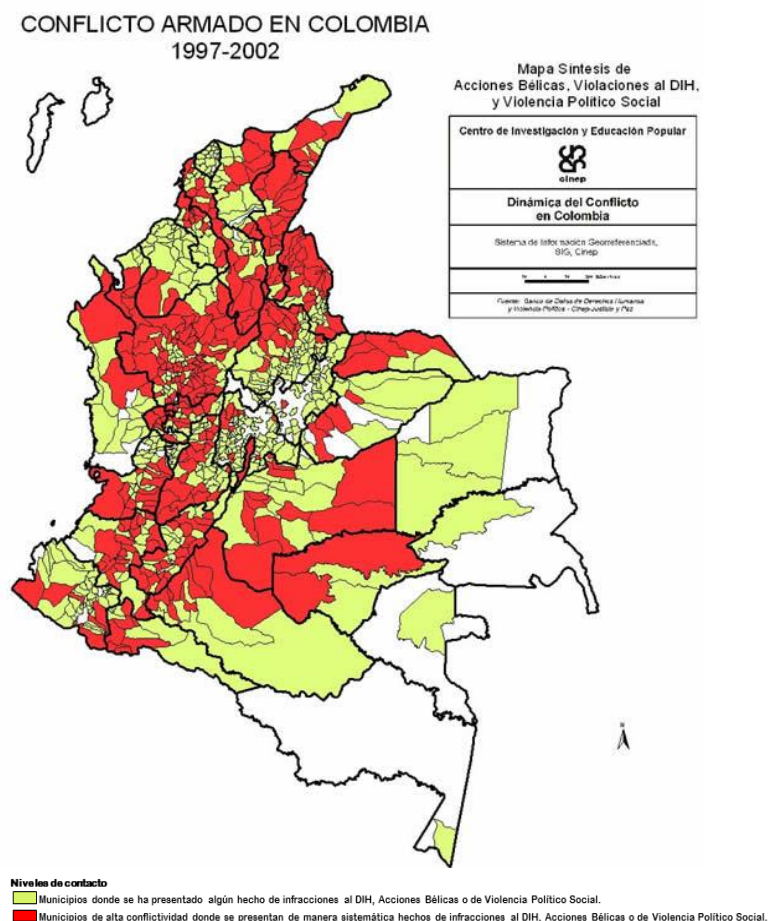
Siguiendo la base anterior, bajo la heredad conflictiva e incesante, se ha prolongado el desarrollo de la territorialidad en Colombia. En sí, la construcción del territorio ha sido diferencial, más que por el carácter del mismo, es por la disparidad de las relaciones humanas establecidas sobre él; pues bien, el territorio es un elemento estructurado más allá de un simple espacio geográfico, en palabras de Mario Sosa Velázquez “[...] no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica [...] Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente.” (Sosa, 2012, p. 7)

Prácticamente, de la misma población, sobre la fragilidad de los espacios fragmentados y el inconformismo surgen las insurgencias rebeldes, relacionando tierra, conflicto y territorialidad, al común denominador del pasado violento que acontece desde la independencia. Entre todo, las guerrillas en Colombia encontraron en lo territorial los fundamentos para esparcir su modelo violento como exigencia a reivindicaciones de igualdad, equidad, entre otras; incorporando con el tiempo al narcotráfico como fuerza de sostenimiento y motor de crecimiento de los grupos guerrilleros.

Al agravarse el conflicto, éste logra adaptarse a circunstancias que obedecen a realidades divergentes en cada región. Bajo este contexto, los grupos rebeldes alcanzaron importantes objetivos político-militares contra el régimen de gobierno, coincidiendo con Theda Skocpol (1995, pg. 6-7), a un escalamiento de la confrontación hasta tal punto que las fuerzas estatales se vieron relativamente debilitadas en su iniciativa estratégica operacional. Tanto que las guerrillas narcoterroristas de las (FARC) casi alcanzan el control del núcleo vital, su misión era tomarse la capital.

De tal forma, entre los años 1997 y 2002 Colombia era un país inviable, con un Ejército inviable y derrotado, en el 2001 había en Cundinamarca 14 estructuras de las FARC rodeando Bogotá. El siguiente mapa (*Gráfico 5*) del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) muestra la evolución del conflicto armado en Colombia entre 1997 y el año 2002. Es evidente que gran parte de la región Andina estuvo secuestrada por las FARC a principios del nuevo siglo.

Gráfico 5. Alcances del conflicto armado entre 1997 y 2002



Fuente. CINEP. Dinámica del conflicto armado 1997-2002

En tales circunstancias, aparecieron distintos escenarios exagerados de violencia en la geografía nacional, donde el Estado parecía carecer del monopolio de la fuerza. La intensificación del conflicto contaminó todas las regiones del país sin excepción, unas con mayor intensidad denominadas “Territorialidades bélicas” (Uribe, 2001, Pg. 251). Manifestándose bajo convicción, la voluntad irrestricta de la población de negarse al sometimiento del orden estatal, pues no prevaleció la soberanía de la institucionalidad.

Claramente, se muestra el establecimiento de zonas rojas en una amplia gama espacial del territorio nacional. Para Serna & Gómez (2009, p. 19), tales zonas representaban territorios violentos revestidos de naturaleza, con la ausencia de la autoridad de los partidos tradicionales, bajo la acción de las guerrillas y la exposición a la agitación y la protesta social.

Pese a todos los esfuerzos del Estado por mantener el orden, los grupos armados lograron establecerse en algunas regiones del país, constituyéndose como actores soberanos en ellas. Según Arjona (2010), desplazando o subyugando las instituciones que regulan la vida de los habitantes. En tal sentido, bajo la ausencia del poder estatal es sustituida la autoridad, abriendo brechas para que agentes externos se disputen esos territorios.

Sin embargo, algunos factores relacionados con las reformas militares desde el período de gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe -como se verá en adelante-, afectaron el centro de equilibrio de los grupos insurgentes. Los cambios producidos al interior de la organización, mejoramiento de equipo y aplicación de la doctrina, optimizaron la capacidad de acción de la fuerza pública. En lo que lleva del siglo XXI la proyección del Estado con el poder militar ha contribuido en parte, con la institucionalización de la periferia.

La transformación militar mejoró la eficiencia operacional de las tropas, el Control Territorial de zonas estratégicas y el acercamiento a la población. De acuerdo con Villamizar, A. & Espejo, citado por Manrique y González, (2014), la administración de Pastrana fue el inicio del fortalecimiento al sector defensa, aumentando el presupuesto dirigido al reforzamiento de las operaciones militares, que con el aprovechamiento del plan Colombia traería un futuro prodigioso. Por lo tanto, la sinergia del brazo armado con su destacada ventaja militar, conllevó al Estado a tomar la iniciativa, debilitando los grupos insurgentes.

De modo que entre 1998 y el 2002 se dio inicio al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Militares, proceso que tomó fuerza durante el gobierno de Uribe. El territorio convertido en un gran teatro de operaciones, producía

cambios cualitativos respecto al uso de tecnologías de avanzada en el campo de combate, ofreciendo transformaciones estructurales en la organización de las unidades militares, asimilando la irregularidad de la guerra, con un vuelco total en la doctrina militar.

Así las cosas, el gobierno Uribe enmarca su política para la consolidación del control estatal dentro del concepto de “retomar el control definitivo de aquellas zonas con influencia, de los grupos armados ilegales y lograr el accionar legítimo en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo integral, conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación interinstitucional” (PND 2002-2006, Pg. 37). Las Fuerzas Militares se convierten en el pivote de proyección del Estado a todos los rincones del territorio nacional.

A partir del momento se había entendido que el principal recurso político para llevar la gobernabilidad al territorio nacional era la fuerza. Siguiendo a Pedraza (2010, Pg. 155), al no disponer de la fuerza como recurso político con la cual se despliega el poder del Estado, otros como los Grupos Armados Ilegales, darán las pautas de gobernabilidad e impondrán sus propios recursos para generar fórmulas estables, en el peor de los casos, con la tendencia a ser aceptadas por actores estratégicos dentro del territorio, entre ellos el mismo Estado.

Fue necesario entonces, una multiplicidad de esfuerzos institucionales para el mantenimiento del orden interno en el territorio nacional. Concentrándose así, “[...] policía en los centros urbanos [...] contingentes de soldados campesinos en las áreas rurales, [...] adaptaron las redes de cooperantes ciudadanos [...] e implementaron un plan operativo contra facciones disidentes, rearmados y emergentes que fueron concentrándose en regiones recuperadas” (Rodríguez, J. 2012, pg. 51). Al tiempo que la acción ofensiva contra los grupos insurgentes restablecía la presencia de las Fuerzas Militares en las áreas críticas, visualizaba el camino hacia la paz negociada.

Actualmente, el contexto geopolítico regional parece favorecer los propósitos de los grupos insurgentes de las FARC y el ELN. Según Ariel Ávila (citado por Rodríguez P. el 09 de septiembre de 2012), en entrevista a la

APF, las FARC, aunque llegaron derrotadas a la mesa, debieron darse cuenta de la llegada al poder de los gobiernos de izquierda. Sobre los últimos años se han multiplicado en el continente gobiernos de Centro izquierda como el caso Salvador, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, motivando a las guerrillas a alcanzar sus fines por la vía política, pues podrían tener apoyo de algunos de ellos.

El Control Institucional del Territorio, el Estado y la guerra

La guerra afecta al Estado y sus instituciones, y éste a su vez buscará la forma de reprimirla con acciones decisivas. “Sería difícil y tal vez imposible encontrar muchos volúmenes sobre la historia política que no mencionan rebeliones, revoluciones, levantamientos, y similares” (O'Neill, 1990, P. 1). En esta gama de conceptos la intervención estatal con sus instituciones legítimas es clave para descubrir la salida al conflicto.

El Control Institucional del Territorio obedece al libre ejercicio de la soberanía ejercido por el Estado sobre el territorio. De modo que “Las condiciones básicas de control institucional del territorio se consideran establecidas cuando la acción integral y coordinada del Estado en una región focalizada ha permitido desestructurar la capacidad de las organizaciones armadas ilegales para ejercer el control de la población” (Lineamientos PNCRT, 2014, pg. 24). Por ello, el gobierno ha buscado por todos los medios superar la difusión desequilibrada que dio origen a todos los problemas persistentes en el territorio.

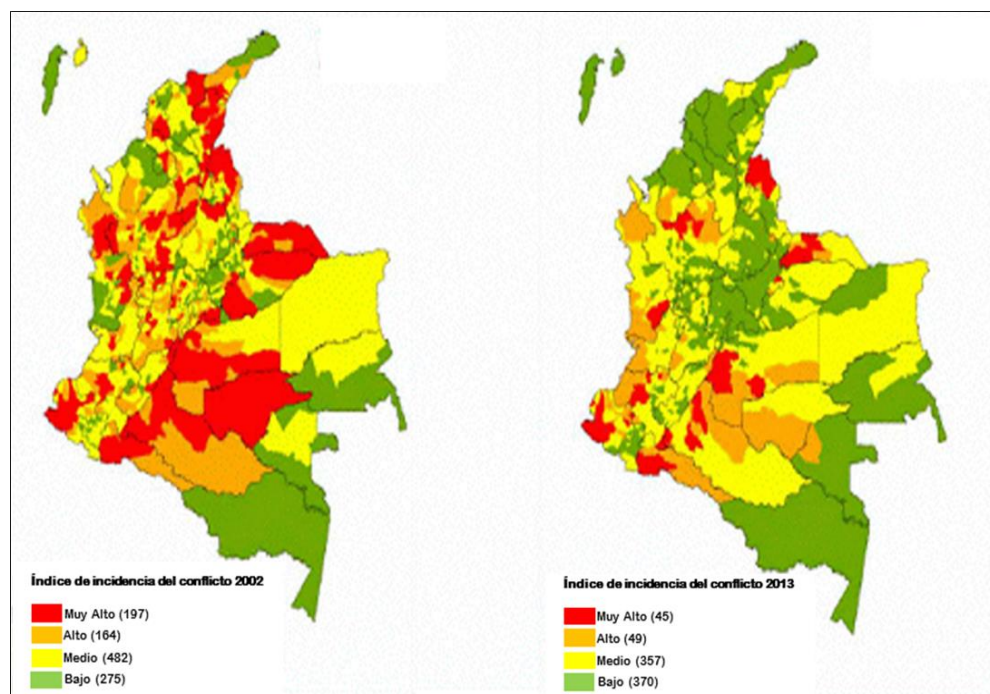
Fue necesaria la presencia integral de todas las instituciones del Estado con tendencia creciente en el territorio, especialmente para restringir espacios a los actores no estatales, solucionar las necesidades sociales insatisfechas, proyectando la legitimidad estatal con la auto-sostenibilidad de las instituciones en un ambiente de gobernabilidad.

Por lo tanto, una de las estrategias del Estado y las Fuerzas Militares para acercarse a las zonas periféricas y cerrar la brecha existente entre estas y el triángulo de oro andino²³ se concentra en el (CIT). Tarea difícil para las

²³ Cundinamarca, Antioquia y Valle.

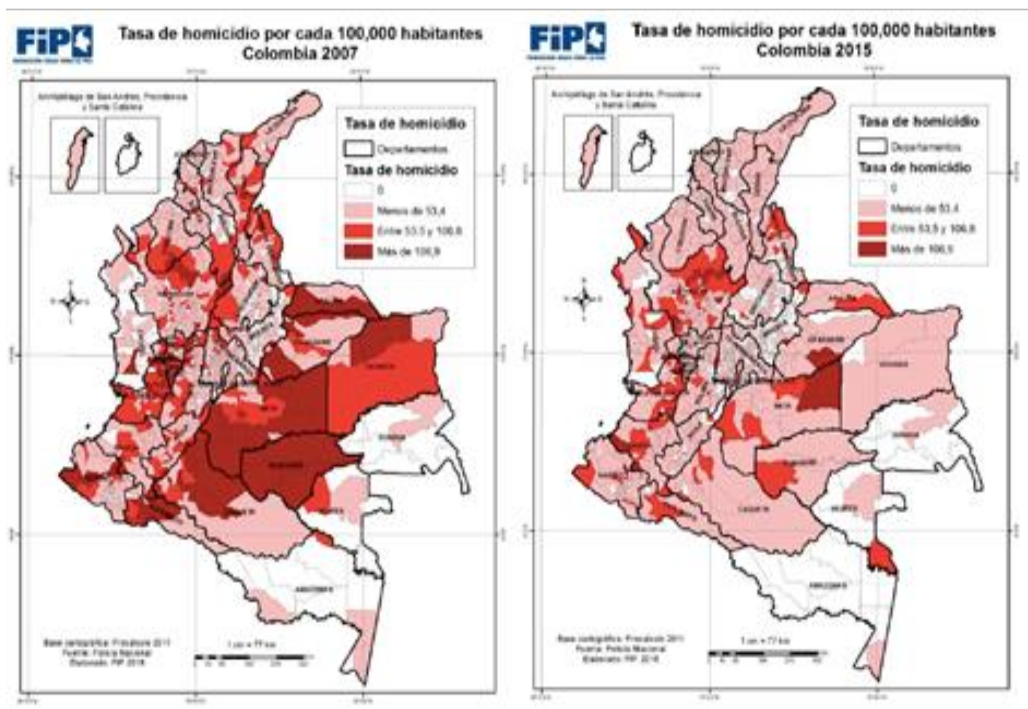
Fuerzas Militares pues, según Galula (1964), se falla al suponer que se puede dotar de legitimidad a fuerzas que son vistas por la población como invasoras²⁴, siendo que persistió en el tiempo la ausencia de la autoridad estatal. Pese a que en las regiones aisladas y para muchas culturas, un Ejército ocupante carecerá de legitimidad de origen, las Fuerzas Militares y de policía han mostrado resultados significativos como lo muestra el mapa (*Gráfico 6*) *índice de incidencia del conflicto 2002-2013* y (*Gráfico 7*) *disminución tasa de homicidios en áreas conflictivas*.

Gráfico 6. Disminución del conflicto armado en Colombia



Fuente. DNP. Índice de incidencia del conflicto 2002-2013.

²⁴ En su mayoría los espacios fragmentados, los grupos alzados en armas tienen el control de la población y del territorio, por lo tanto, el esfuerzo de alcanzar legitimidad entre los habitantes es mayor para las fuerzas del Estado, de hecho, el enfoque de ganar el corazón y la mente de los habitantes se centra en esto.

Gráfico 7. Disminución tasa de homicidios en áreas conflictivas

Fuente. FIP-PONAL. Tasa de Homicidios 2007-2015

Los índices expuestos anteriormente muestran prácticamente la mejora en cuanto a disminución del accionar de los grupos armados y el aumento sustancial de la seguridad. Con avances en control del territorio sobre las zonas norte y sur oriente del país. Sin embargo, zonas muy inseguras aún prevalecen sobre los departamentos del Choco, Cauca, putumayo, meta Guaviare y Arauca.

De modo que el Estado tiene un gran desafío para llevar la institucionalidad a estas áreas donde aún no se ha podido garantizar el orden legal y constitucional. De acuerdo con González & Otero (2010), la construcción de Estado en Colombia ha adoptado un sentido no convencional por la presencia diferenciada de las instituciones estatales en el territorio nacional. En estas áreas la dificultad de representación del Estado agudiza la ausencia de sobe-

ranía, evidenciado con el transcurrir de más de dos siglos, la incapacidad de ejercer en forma absoluta el Control Institucional del Territorio.

Por lo tanto, el proceso de construcción de Estado en Colombia también debe ser diferencial, con un enfoque en los territorios periféricos más marginados y golpeados por la violencia. Según Patiño (2012), en décadas de vida republicana la debilidad del Estado ha enfrentado fuertes poderes locales y regionales, traducidos en continua violencia desde la época de independencia, siendo incapaz de llevar a buen término la centralización política y el monopolio de las armas. Seguridad interna que ha sido llevada a los espacios de no integración, donde la coexistencia del orden es característico solo en las regiones centralmente cohesionadas por el gobierno.

No obstante, para entender la morfología del Control Institucional del Territorio (CIT) es necesario preguntarse ¿Cómo se relaciona el Estado, la guerra y el CIT en los conflictos de baja intensidad? Los conflictos bélicos exigen la transformación de las instituciones, cambios en el interior del Estado. Sin embargo, se debe identificar la relación guerra y Estado desde la perspectiva de los Estados plenamente desarrollados y aquellos en proceso de formación o incompletos. En 2015, Jaramillo, citado por Ayoob (1995), plantea que en los países tercermundistas la viabilidad de Estado no está ligada específicamente a elementos militares, pues el elemento de seguridad tiene completa dependencia de las dinámicas políticas.

Prácticamente, las actuaciones de los militares obedecen a un profundo análisis sujeto a tareas en beneficio mutuo que apoyan la gobernabilidad. Sus acciones “[...] están supeditadas a la acción política de los ciudadanos” (Cadena 2008, Pg, 145). Razón por la cual los asuntos militares se consideran acoplados a las políticas públicas, más cuando se trata de temas de grupos aislados de la sociedad civil dominante. Además, el dominio de la población es la herramienta de Control Territorial, que a su vez le permite al Estado proyectar el ejercicio de la soberanía.

Weber estudia la sociedad alemana, en su proyecto de construir una nación en medio de la guerra. Es así como en 1919, Weber define al Estado como

un conjunto de instituciones articuladas dentro de un territorio, cuya unidad política se reserva para sí el uso de la fuerza, donde la comunidad reclama con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Max Weber afianza su concepto basado en la situación vivida por Alemania tras perder la Primera Guerra Mundial, pues el tratado de Versalles había derrumbado su poder de decisión sobre quiénes eran los amigos o enemigos.

Prácticamente se exige una sujeción del individuo a la política y la ley, donde la institucionalidad posee la absoluta autoridad en el territorio. Siguiendo la base anterior, la unidad política posee la facultad soberana para nominar quienes no son los amigos del Estado. Es decir, “encargada de decidir cuáles son los enemigos [...] establecer los casos en que un enemigo potencial se transforma en enemigo real. Esta decisión trae aparejada la determinación del que no puede ser considerado como enemigo” (Saravia, 2011, pg. 83). Por ello, la Alemania de Weimar al no tener poder de decisión no existía como pueblo. Es así que, en 1933, Alemania buscando salvar la república reclama su espacio vital y declara la guerra a Polonia.

Igualmente, académicos como Charles Tilly (1992) y Carlos Patiño (2005, pg.32) reafirman lo fundamental de la guerra en la formación de los Estados Nación occidentales, y definen al Estado como unidad de dominación, con capacidad de tomar decisiones soberanas por sí mismo, y como un todo decidir a quién se le hace la guerra. Tilly (1992), en su análisis respecto al marco de formación del Estado moderno desde la edad media manifiesta que el Estado hace la guerra y viceversa. Basado en lo anterior, las acciones bélicas permitirán ejercer el poder y soberanía en el territorio que se gobierna y sobre quien lo habita.

Ahora bien, el aparato bélico en la guerra convencional o llámese interestatal, es separado de la sociedad, en contraposición con la violencia interna donde posee un estrecho vínculo. Creveld (1991, pág. 337), resalta en la nueva concepción de los conflictos globales irregulares la no distinción entre civiles y militares, así como el predominio de la violencia tradicional y privatizada que escapa del control estatal. Por ende, actores no estatales, insurgen-

tes, delincuencia común organizada y muchos más se disputan el monopolio de la fuerza, el dominio de la población y el Control Territorial.

Evidentemente, el continuo laboratorio experimental de la guerra convencional evita particularmente el florecimiento de cualquier tipo de confrontación interna. Por consiguiente, el Estado ejerce Control Territorial y soberano en todo el territorio. Por el contrario, evita que las amenazas puedan adentrarse desde afuera; siguiendo a Patiño (2012, pg. 18), la guerra es llevada al ámbito internacional, manteniendo al margen la problemática basada en la violencia generalizada entre el Estado y la sociedad, evitando los focos de conflicto interno, de modo que la guerra es conservada como actividad pasiva y estratégica del Estado que se aviva a la hora de la confrontación. Desde esta perspectiva, el factor interno de violencia de un Estado es resultado del pobre y reducido ejercicio de la soberanía en su espacio territorial.

Basado en lo anterior, cuando el Estado y sus instituciones no se logran posicionar en la totalidad de su territorio, no hay existencia de un orden social o autoridad proclamada de la unidad política, es por ello que la población reclama esa identidad como ciudadano miembro de una nación²⁵, pues no existe el monopolio de los medios de coerción. Así, la violencia de los conflictos internos responde a un ejercicio continuo de mantenimiento y defensa del orden, de un lado; y de derrocamiento y desafío de ese mismo orden, con miras a la construcción de un nuevo ordenamiento social y político, del otro (Kalyvas, Shapiro y Masoud, 2008). Es precisamente porque el proceso de construcción de muchos Estados como los latinoamericanos ha sido demasiado corto, tanto que existió en algunos casos como en Colombia primero el Estado que la nación.

En este sentido, se destaca que en la larga línea del tiempo primero se encubo la nación y sobre esa base surge el Estado. Primero se creó la idea de nación que trascendió regiones y culturas de un territorio, otorgando una identidad hasta el sentir de ciudadano y sobre el cual se cimentó el Estado. Se advierte entonces, que el Estado moderno en sí, se construye histórica-

²⁵ En relación a una identidad y cultura entre otros elementos presentes en el territorio. En la creación del Estado Moderno la Nación precede al territorio.

mente durante largos períodos de tiempo, en dimensiones de espacio diferentes. De acuerdo con Charles Tilly, (1992) son trayectorias de largo aliento. Por ello, los verdaderos Estados territoriales europeos originados tras la paz de Wesfalia demoraron para su formación más de nueve siglos. Es por eso que debajo de cada Estado en Europa hay un cementerio de Ejércitos victoriosos.

En la historia de los Estados de occidente, se enterraron el sacro imperio Romano, el imperio bizantino, el imperio mongol, el imperio zarista, entre otros. Tilly (1992, pg.40) afirma que en el siglo XX Europa termina con aproximadamente entre 28 Estados de casi 500 que existían en el siglo XV. Son realmente cambios estructurales que con el pasar del tiempo originaron los Estados-Nación conocidos hasta ahora.

Hasta el último minuto se marca la trayectoria de grandes imperios: Así, por ejemplo, el imperio británico duro hasta principios del siglo XX²⁶, durante el mismo siglo también se consumó el imperio soviético con la revolución de febrero de 1917. Entre todo, los actuales Estados conocidos hasta ahora, son realmente los sobrevivientes, aquellos triunfantes en una larga carrera de casi un milenio para su formación.

La cuestión gira alrededor de que el verdadero Estado moderno²⁷ logro establecerse tras siglos de lucha, dimensionando aparatos bélicos poderosos. Todo ello, bajo condiciones de fuerza, culturales, étnicas, económicas y religiosas, hasta su establecimiento como unidad de vida social. De tal forma “El siglo XX se recibe con la herencia de aquellos Estados organizados en imperios [...]” (Martínez, 2014, pg. 49). En si sobre la ruina de grandes imperios se construyeron los Estados-Nación. Por tal motivo, hablar de Estado en cortos períodos, donde no se visualiza el tiempo y espacio, sería hablar de Estados en formación. Pues bien, no sería posible construir un Estado en dos siglos de historia, mucho menos en cincuenta años de guerra.

²⁶ Considerado el Imperio más grande, duradero y extenso de la historia

²⁷ Nacen los Estados Territoriales Europeos tras la paz de Wesfalia, por ello se conoce como Estado Wesfaliano.

Ante este asunto, se puede advertir que los Estados con vasta trayectoria y gran experiencia en la guerra Interestatal no sufren el flagelo de los factores internos de violencia. Por lo tanto, ejercen la soberanía las instituciones públicas que lo componen en la totalidad del territorio. Más aún, han logrado para sí reservarse el monopolio de las armas, a diferencia de los Estados jóvenes que no tienen un recorrido histórico mayor en la guerra interestatal, debatiéndose entre guerras civiles o conflictos internos.

Así, la dinámica de la crisis de seguridad en el interior de los países tercermundistas ha reemplazado la competencia de los superpoderes, pues se convierte en la columna vertebral de la construcción del Estado, generando una creciente interacción entre espacios geográficos, población e inseguridad. Pues el control interno del territorio y el monopolio de la fuerza se disputa con actores ajenos a la institucionalidad, como el narcotráfico, la insurgencia y la delincuencia Común Organizada.

Ante todo, la mutua correspondencia existente entre guerra y sociedad en los conflictos armados internos, asimila la importancia de la población para la solución de los mismos. Una realidad donde el control de la población es directamente proporcional al control del territorio. Por cierto, en las guerras irregulares la influencia sobre la población y la legitimidad de la intervención son prominentemente indispensables. “El contacto con la población, es en realidad la primera confrontación entre dos bandos por el poder sobre la población” (Galula, 1964, p.6). En efecto, los grupos insurgentes forzarán un gran cambio político, influyendo en la población para su aceptación; por otra parte, los Estados buscarán alcanzar la práctica legítima y total de la soberanía.

Nuevo campo de batalla del Estado en la consolidación como unidad de vida social

El nuevo campo de batalla de las nuevas guerras gira alrededor de un escenario donde se lucha por el individuo. Para Arjona (2008, pg.118), los actores armados insurgentes, buscan conseguir legitimidad tanto en el ámbito interno como externo, siendo capaces, por ejemplo, de apoyar movilizaciones

sociales masivas que planteen retos significativos al Estado, proyectándose como actor fuerte y legítimo, pues mostrará una imagen poderosa con capacidad de movilización de masas y base social cohesionada. Pues bien, en el paradigma contemporáneo, el apoyo civil adquiere un valor considerable, de acuerdo con esta visión, la victoria va más allá de una prueba de fuerza, requiriéndose conquistar la voluntad política de la población, racionalizando el uso de la fuerza, al tiempo que se evita la confrontación armada.

Actualmente, la dimensión central de los conflictos armados²⁸ se sienta sobre el conjunto de individuos que habita el territorio. Siendo que “[...] el ejercicio del poder político depende del acuerdo tácito o explícito de la población, o en el peor de los casos, de su misión” (Galula, 1964, p. 6). En esta área de confrontación las ideas más que las balas tienen el poder de un arma nuclear.

En la actualidad la población junto con su cultura y la sociedad como un todo, además de un componente interinstitucional que garantiza la seguridad nacional, son el nuevo componente de los conflictos armados. Particularmente, la población es el factor esencial y el elemento más importante para lograr el control institucional del territorio. Siendo un proceso de interacción de los actores presentes y dominantes en la guerra interna que caracteriza a los países tercermundistas como el caso de Colombia.

Visto de esta forma, en estas guerras es vital el acercamiento de las instituciones legítimas con la población. Incidentalmente las Fuerzas Militares del Estado aprenderán a vivir entre la población, manteniendo el contacto con ella. Esto en principio puede aumentar el riesgo de bajas, pero se protegerá a la población efectivamente; a largo plazo, también ofrecerá mayor protección a las propias tropas. Así, separando al enemigo de la población civil y con la gente del lado del gobierno, se cortan las líneas de apoyo y sostenimiento del adversario, al tiempo hay un fortalecimiento de capacidades²⁹.

²⁸ Híbridos, asimétricos e irregulares.

²⁹ Aumento de la inteligencia humana, apoyo, legitimidad.

Por ejemplo, el éxito del General Petraeus³⁰ en Irak al entrar a Mosul no consistió en el uso de los tanques, ni de la aviación, sino en ganar el corazón de sus habitantes. Simplemente rompió el vínculo de unión que existía entre los grupos insurgentes y sus habitantes. Siguiendo a Galula (1964), la población es el nuevo territorio que aprovechará la insurgencia para mantener equilibradas las disparidades físicas en su contra. De ahí, Petraeus entendió que la población civil era de vital importancia no solo para los insurgentes.

La población en contra de los grupos insurrectos, apoyaría el objetivo de reforzar la gobernabilidad, por ende, no limitó solo los esfuerzos a la seguridad de la fuerza, también evitó que los insurgentes ganaran el apoyo activo de la población. De este modo, el alto mando militar abordó la población civil para ganar la iniciativa, manteniendo el balance respecto a la misión, la protección de las tropas y la seguridad de la población civil.

Nada fácil para los organismos estatales, puesto que la percepción de seguridad y legitimidad frente a la población solo estará de su lado cuando el poder de la insurgencia haya sido quebrantado. Sin el apoyo de la población difícilmente se puede mantener el elemento insurgente. Por ello, es clave aislarlo, contrarrestando sus esfuerzos para influir en los habitantes.

En atención a lo expuesto, estableciendo la conexión orgánica en relación al espacio geográfico, la población y la estructura armada, Castillo & Salazar en (2006 pg.41), manifestaron que la condición esencial para el crecimiento conjunto entre territorio y Control Territorial es el impacto de los agentes armados en la supervivencia de las comunidades. En tales circunstancias, la relación Control Territorial y grupos armados representan un amplio espectro

³⁰ En abril de 2003, el General de División Petraeus y la 101ª División Aerotransportada del Ejército de EE.UU. entraron en la ciudad septentrional iraquí de Mosul, capital de la provincia de Nínive. Había transcurrido menos de un mes desde entrada de EE.UU. a Irak. Pero las tropas de EE.UU. ya habían capturado Bagdad, el dictador Saddam Hussein había huido y, aunque la seguridad seguía siendo una preocupación fundamental, los militares de EE.UU. ya no estaban en modo de batalla completa.

de posibilidades hacia diferentes líneas de acción, evitando la dependencia solo de las capacidades militares³¹.

En ese orden de ideas si la insurgencia se nutre de la población, vive con ella, se alimenta de ella, es apoyada por ella y de ella recibe información, el esfuerzo máximo en las áreas críticas debe estar direccionado a que “Las unidades deben desplegarse donde la población realmente vive y no en posiciones que parezcan tener valor militar. Una unidad militar puede pasar toda la guerra en posiciones pretendidamente estratégicas sin contribuir de ninguna forma a la derrota del insurgente”. (Galula 1964, Pg. 111)

Siguiendo la base anterior, este esfuerzo debe ser mancomunado e interorganizacional³² como parte del enfoque integral y sistemático del Estado, debiendo llegar, al punto de sostener la acentuada interdependencia de crecimiento entre espacio y comunidad.

Ahora bien, en términos formales la población define la noción de Control Institucional del Territorio y esta a su vez, puede definir el ejercicio de la soberanía. Basado en lo anterior ¿Cuál es la noción de soberanía sobre los diferenciados espacios geográficos donde los niveles de violencia interna no son iguales? Kalyvas (2006, pg.88), manifiesta que, debido a la fragmentación del espacio, existe una alteración en la naturaleza misma de la soberanía, ello, por efecto de la irregularidad de la guerra, de modo que del trato y la intensidad de la relación de los agentes dominantes que intervienen en el conflicto hacia la población, depende la soberanía ejercida sobre el territorio.

De forma que la ganancia en Control Territorial es positiva para el Estado siempre y cuando exista una fuerte segmentación de la soberanía, basada en la dominación total de la población.

³¹ Evitando direccionar recursos en un solo sentido. Las capacidades militares por si solas no son suficientes.

³² El concepto gira alrededor de lo interinstitucional, lo integral, armonizando con las Organizaciones públicas y privadas, internas y externas.

Tabla 11. Soberanía: Zonas de segmentación y fragmentación (Violencia interna)

IMPACTO DE LA POBLACION EN LA FRAGMENTACION DEL ESPACIO		Ninguna o menor participación de grupos insurgentes-Mayor grado de expectativa de cooperación de la población		Mayor participación de grupos insurgentes-Menor grado de expectativa de cooperación de la población	
					
Variables de Dependencia	Zona I (Estado)	Zona II (Estado)	Zona III (Estado-Insurgentes)	Zona IV (Insurgentes)	Zona V (Insurgentes)
Soberanía Fragmentada		Mayor control por parte del titular. Violencia selectiva.	Control de las partes con igual intensidad de las partes.	Control de los actores dominantes con mayor intensidad de los Insurgentes. Violencia indiscriminada contra la población, para lograr cooperación	
Soberanía Segmentada	Domina-ción total de Población por				Domina-ción total de Población por

	parte del Estado				parte de Grupos Insurgentes. Control social, cohesión y colaboración civil.
--	------------------	--	--	--	--

FUENTE: De elaboración propia. De acuerdo a la teoría de Kalyvas “The logic of violence in civil war” 2006.

De acuerdo a lo anterior, el marco de confrontación muestra un espacio geográfico segmentado en cuanto al ejercicio de la soberanía por dos polos opuestos: La zona uno de control total del titular (Estado), y la zona cinco de control total de los insurgentes. Igualmente, un espacio geográfico con soberanía fragmentada en crecimiento de forma proporcional cada vez que aumenta la influencia y participación del adversario.

Aunado a ello, el uso de la fuerza en este escenario es inversamente proporcional³³, disminuyendo en la medida que se acerca al estado de dominio de la población. Con el dominio de la población³⁴ aumenta la sinergia a un esfuerzo mayormente político, cerrando las brechas existentes entre las zonas 1 y 5.

Las zonas 2,3,4 representan la soberanía fragmentada; siguiendo a Kalyvas (2006), fragmentada porque su ejercicio es limitado o incompleto sobre la misma parte de un territorio, al tiempo se convierten en zonas de disputa de

³³ Sobre la zona cinco hay mayores incentivos para el uso de la fuerza por parte del Estado; la competencia militar prima sobre la dimensión política, un esfuerzo mayor se orienta a la capacidad militar para combatir grupos insurgentes. En todas las circunstancias, el enfoque integral acompañara esta labor, en una batalla invisible y paralela al esfuerzo armado sobre la población y el enemigo para ganar su cooperación.

³⁴ En la zona de dominio 5 el retador gana un espacio de aceptación y subordinación de la población. El grupo armado retador multiplicara sus capacidades con el apoyo del pueblo, dirigiendo sus acciones hostiles a enfrentar las fuerzas del Estado.

los agentes dominantes en la confrontación. Se puede considerar en este espacio de fragmentación la falta de coerción institucional sobre la población incentivando la violencia interna.

En la realidad del Estado colombiano ha sido difícil centralizar el poder materializándose en la baja legitimidad institucional. Esta problemática explica la fragmentación de la soberanía existente en algunas regiones geográficas del país. De acuerdo con Bonett, (2008, p. 15), es precisamente en términos de seguridad interna, esa falta de sinergia e integralidad entre el poder ejecutivo y los demás organismos del Estado en el logro de los objetivos, lo que ha prolongado el conflicto interno.

Como se observa, el estímulo del conglomerado humano en las diferentes regiones de Colombia para el desarrollo social y regional depende del grado de influencia del propio Estado en cada una de ellas. Sin embargo, muchas son las dificultades que el Estado tiene para llegar a la totalidad del territorio rompiendo el vínculo: Gobierno, territorio y población. Ovulando entonces, el factor de inseguridad que “emana principalmente por dentro de sus fronteras y no por fuera de ellas” (Ayoob, 1995, p. 7)

Específicamente en Colombia, el conflicto armado iniciado en la década de los 60s se centró en los territorios discriminados cuya topografía dificultaba la labor de las autoridades, facilitando la acción de inestabilidad. “El control local es conquistado por los insurgentes la mayoría de las veces, gracias al abandono estatal de regiones apartadas y marginadas de todo progreso [...] de toda acción de gobierno” (Ospina 2011, p. 33). Situación en la que curiosamente, el enemigo hace pate de la población, donde el inconformismo por la acción no soberana de las instituciones públicas, motivo la formación de grupos rebeldes entre las gentes.

En 1964, rebeldes bajo el título de guerrillas se ubicaron en territorios que facilitaron su economía de guerra, el control de poblaciones aisladas y dispersas, llegando a dominar diferentes áreas estratégicas en todo el país. La nascente guerra en medio de la población del general Sir Ruger Smith en su concepto teórico, creció desenfrenadamente desde el corazón del campesina-

do. De acuerdo con Ferro y Uribe (2002), los milicianos, por ejemplo, son civiles que hacen vida partidaria y política. Sus vidas giran al rededor del trabajo, su hogar, la finca donde habitan y el campo de combate, constituyéndose en un concepto muy claro de este grupo insurgente.

Principalmente, el grupo guerrillero de las FARC desde sus comienzos, durante las primeras décadas de su actividad guerrillera, buscaron el apoyo de los colonos a través de la ocupación de regiones olvidadas, para después alcanzar zonas de importancia estratégica por sus recursos. Estos recursos, así como el trabajo de masas favoreció el crecimiento del grupo insurgente.

Entre tanto, el surgimiento de nuevos frentes y su ubicación en áreas estratégicas para su financiación tiene gran incidencia con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. De acuerdo con La Rotta (1996) y Vargas (2003), sobre los 90 la participación de los grupos guerrilleros en actividades de narcotráfico aumentó hasta el punto en que lograron establecer un sistema de producción, transporte y comercialización creado por ellos mismos. Vinculando entonces al narcotráfico con la expansión de grupos ilegales.

Ocurren entonces enfrentamientos entre grupos presentes en el mismo territorio, que combaten en medio a la población, lo cual genera masacres³⁵, desplazamiento forzado, etc. Unos y otros, pretenden desacreditarse así mismos, al tiempo que buscan la legitimidad y la influencia en la totalidad de la población, haciendo uso de la violencia indiscriminada para ganar subordinación y autoridad en los pobladores. Por un largo período y coincidiendo con Rangel (1999, P. 26-30), mayormente el éxito territorial y militar de las FARC se debió a la creciente multiplicación de sus frentes, facilitando la confrontación armada en zonas recónditas y abandonadas por el Estado, con ello dispersando al Ejército, a la vez que concentraban su actividad en áreas estratégicas y de importancia económica.

³⁵ La disputa por el territorio entre grupos paramilitares y las FARC en 2002 por ejemplo, trajo como consecuencia la masacre de Bojaya, donde mueren 116 personas entre ellos 46 niños, por la explosión de un cilindro lanzado por las FARC contra la iglesia donde estaban refugiados.

Obligando así al Estado a emplear todos los medios posibles para enfrentar la amenaza, naciendo un espacio de confrontación donde la soberanía fragmentada en su mayoría, deja a la población en medio del conflicto y al conflicto entre las gentes³⁶. De acuerdo a lo anterior, Smith (2005), coincide en señalar la mutación sufrida a los antiguos conflictos convencionales, circunstancias en las cuales, ahora la población constituye el principal elemento del territorio, así como del campo de batalla donde combatientes y civiles se confunden intencionalmente. Por su parte, éste oficial considera un nuevo escenario marcado por guerras con fines diferentes a aquellos librados en el pasado, así los objetivos materiales y destructores de las guerras industrializadas, son remplazados por elementos intangibles como la legitimidad, o influencia sobre la población civil.

Es por ello que los conflictos de ahora, no se sobrepone la fuerza para poder imponer la voluntad del vencedor. Por lo general, el enfoque político de los actores insurrectos, buscará también conseguir la legitimidad, enarbolando un ideal común para promulgar la cohesión social y fortaleza de la organización. Un ejemplo claro podría ser enarbolar la paz para proclamar ideales contrarios a las políticas democráticas.

Basado en lo anterior, las guerrillas en Colombia en la dinámica de lograr sus objetivos, se despliegan no solo sobre la base de la acción armada, sino también del discurso político. Por lo tanto, en sus campañas políticas, el partido permeara en la sociedad siempre y cuando, tengan éstas el control de la población. De acuerdo con Ospina (2011, pág. 29), la relación partido-pueblo debe estar muy bien cohesionada, de lo contrario el pueblo no seguirá el partido. Para ello, el pueblo debe obtener la aceptación, inclusive someterse a su autoridad y subordinación.

³⁶ Inclusive las fuerzas a las que se recurre para establecer la institucionalidad son opresivas y suscitan reacciones muy desfavorables, tachan la población de terroristas, guerrilleros o colaboradores, poniendo en peligro la integridad del personal, puesto que no fluye la información y se incrementan las acciones hostiles de los insurgentes. Esto provoca ruidos en la relación entre fuerza pública y población, lo cual no es deseable.

De la misma manera, llama la atención que, en la batalla invisible del Estado por ganar los corazones y las mentes de los habitantes, el razonamiento estratégico apunta igualmente a modificar la voluntad del adversario. Obligándolo desde esta perspectiva a establecer condiciones y modificar intenciones, siendo en ese momento donde el gran esfuerzo decisivo de las Fuerzas Militares ha coadyuvado a anular su voluntad combativa.

Pensando estratégicamente, el nivel de actividad del Estado para mantener un control institucional efectivo del territorio, dependerá entonces de empezar por establecer primero donde hay mayor efectividad de las instituciones legítimas y donde es menor la capacidad de influencia del enemigo y viceversa. Prácticamente definir donde está la mayor y la menor probabilidad de Control Territorial, a partir de ello, volcar las capacidades en dos frentes: desde los polos opuestos hacia el centro (Zona 3), zona donde se alcanzará el poder culminante³⁷. “(...) la respuesta sería (lo suficiente) ya sea para aniquilar al enemigo o forzarlo a percibir que continuar con la resistencia no vale la pena.” (Dunlap, 2006, pág. 78)

Comportamiento de las proyecciones político-militares de las FARC respecto a la población

Entre la década de los 60s y los 80s la influencia de las FARC se trasladó no solo a las áreas rurales, también a las áreas urbanas. Desde sus de su actividad guerrillera, buscaron el apoyo de los colonos a través de la ocupación de regiones olvidadas, alcanzando zonas de importancia estratégica por sus recursos. Estos recursos, así como el trabajo de masas favoreció el crecimiento del grupo insurgente.

Iniciaron entonces un acrecentamiento acelerado en el interior de la organización guerrillera, debido a la expansión ejercida desde las áreas de colonización hasta las áreas de influencia económica. Pasando de 43 hombres al inicio de 1964 y terminando con 17000 hombres en sus filas a finales de 2002 (Saumeth, 2004).

³⁷ Conclusión satisfactoria de un nivel dado de conflicto.

Estas áreas, por su ubicación, también les permitían conectarse entre diferentes departamentos, convirtiéndolas en centros de operaciones, de entrenamiento y de acopio logístico. Desde esas áreas podían incursionar contra centros urbanos de importancia, al tiempo que aligeraban el lanzamiento de acciones ofensivas contra la fuerza pública.

Durante la década de los 80's, en la medida en que comenzaron a ocupar dichas zonas, concentraron sus esfuerzos en la vía de las armas, el secuestro, la extorsión, el terrorismo y el narcotráfico. A mediados de 1980 las FARC centralizó sus finanzas, facilitando el control y concentración de los recursos, en una visión global de la organización abarcando inclusive estímulos selectivos a sus integrantes o satisfacción de necesidades básicas a través de incentivos (Ferro & Uribe, 2002, p. 108). Logrando en este caso, un complejo aparato de financiamiento a la estructura, acomodándose igualmente al direccionamiento de la economía al sector minero-energético entre 1980 y 1990.

Iniciando pleno siglo XXI, el grupo guerrillero de las FARC había acumulado grandes capitales³⁸. En 2002, Vargas manifestó que en ese período cerca de 120 millones de dólares anuales eran producto de actividades extorsivas principalmente en el sector minero-energético, sumado a esto, aproximadamente 400 millones de dólares al año en el máximo apogeo del narcotráfico.

Prácticamente, la economía de guerra les permitió un exagerado crecimiento, pues habían sabido interactuar entre el territorio y la población, dando cumplimiento progresivo a sus estrategias políticas y militares³⁹. Coincidiendo con Beltrán (2009) citado por Rodríguez T. (2012, p. 6) el grupo insurgente de las FARC logro una mayor urbanización del conflicto, además Rodríguez (2012), refiere que a partir de la 8° conferencia se realza la legitimidad del movimiento cuando se autonombraron el Ejército del pueblo (FARC-EP)⁴⁰ ganando mayor relevancia en lo Político-Militar, garantizando

³⁸ Ingresos ilegales, suficientes para el sostenimiento de la Organización Insurgente.

³⁹ Pasaron a una fase de guerra de movimientos que sucinto la preocupación inclusive del Departamento de Estado en EE. UU por el advenimiento de un posible Estado Fallido.

⁴⁰ Se denominaron Ejército del pueblo a partir de la Séptima Conferencia que tuvo lugar entre el 4 y 14 de marzo de 1982.

la permeabilidad a su naturaleza revolucionaria. Acción que le otorga cercanía al campesino⁴¹ y la legitimidad que no alcanzan por otros medios, motivando el apoyo especialmente de los habitantes rurales al grupo insurgente.

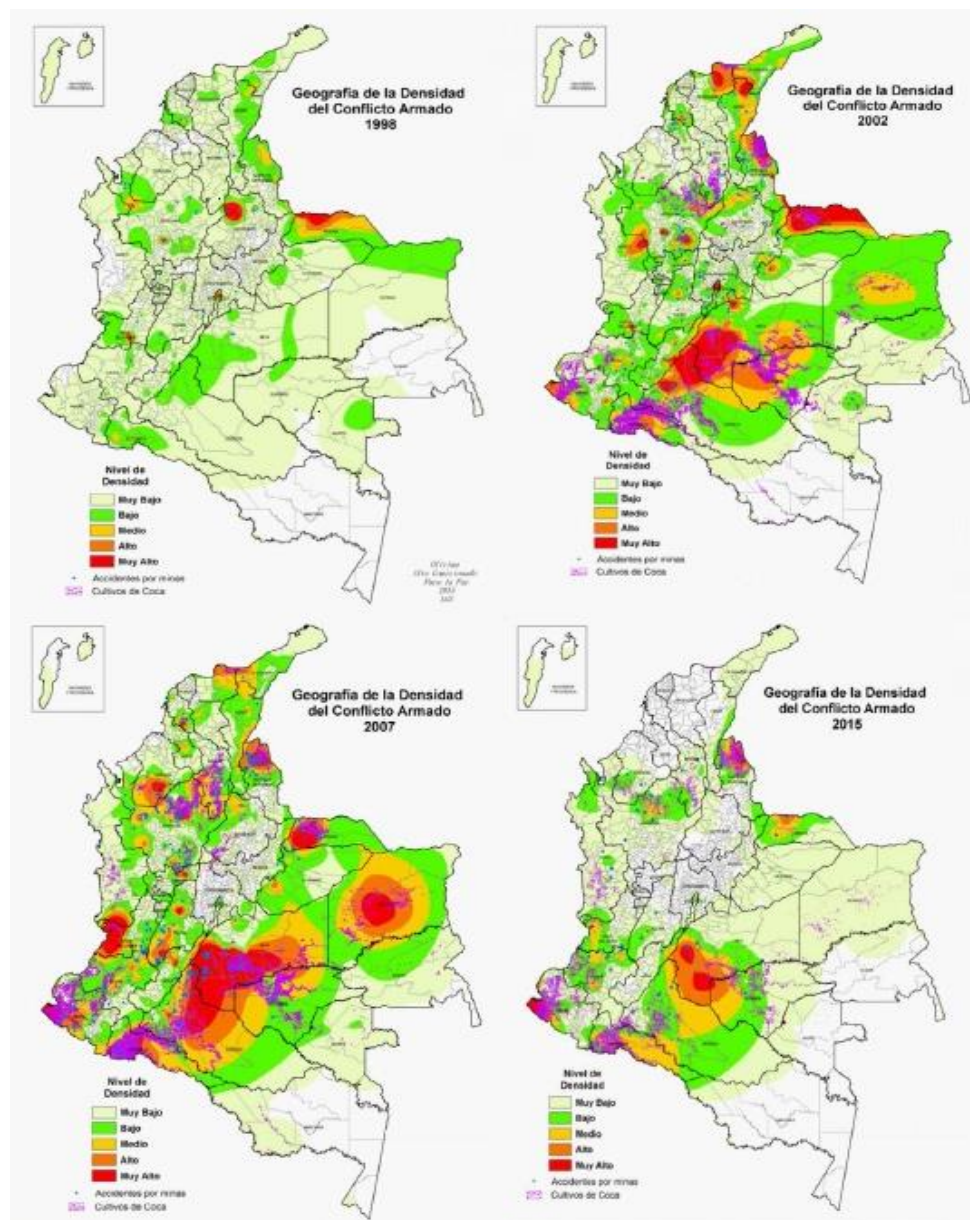
Aunque en su ideal han buscado el poder a través de todas las formas de lucha “para gobernar y retomar al Estado utilizando para ello cualquier vía: la política, la armada, o en dado caso la combinación de las dos” (UMNG, diciembre 15 de 2001, p. 3). Las raíces de sus acciones revolucionarias fueron deslegitimadas primero por la continuidad de una forma de lucha cimentada en el poder de las armas, más que en un enfoque político debidamente estructurado. Segundo, por las actividades del narcotráfico, terminando como carteles narco-terroristas⁴², perdiendo credibilidad y debilitando la relación partido-pueblo.

Las incursiones terroristas fueron en aumento, contra la población, la infraestructura y la fuerza pública. Descuidando la zona de dominio en línea a la conquista del respaldo de los habitantes de las zonas en las que se instalaban sus frentes, obteniendo cada vez menos atención y apoyo cooperativo. “Las FARC [...] tuvieron actividad armada en el 10% de los municipios durante el período 1998/1990, la que se incrementó a 29% durante el período 1998/2000” (Sánchez & Chacón 2005, p. 34). Persistiendo en el modelo de la violencia, a medida que aumenta su poder y expansionismo geográfico, fueron olvidando que el apoyo de la población era lo fundamental.

⁴¹ Los grupos insurgentes se nutren de la población campesina especialmente, sectores conformados por personas de bajo nivel cultural, de ideología vulnerable, y que, por esta condición, son más susceptibles a la acción psicológica. En estos grupos es donde hay mayor descontento por la desigualdad de oportunidades y por el acumulo de privilegios en otras clases sociales. Así, existen grupos de población, en los cuales, dadas sus vulnerabilidades socio-económicas y educativas, el cambio de voluntad es más fácil de trabajar.

⁴² Con el estatus de narco-terroristas perdieron un espacio de legitimidad política. En 2001 fueron ratificados por EE. UU como organización terrorista -Orden ejecutiva 13224-, en 2003 como organización narcotraficante.

Gráfico 8. Geografía del conflicto armado desde 1998-Afectación Territorial

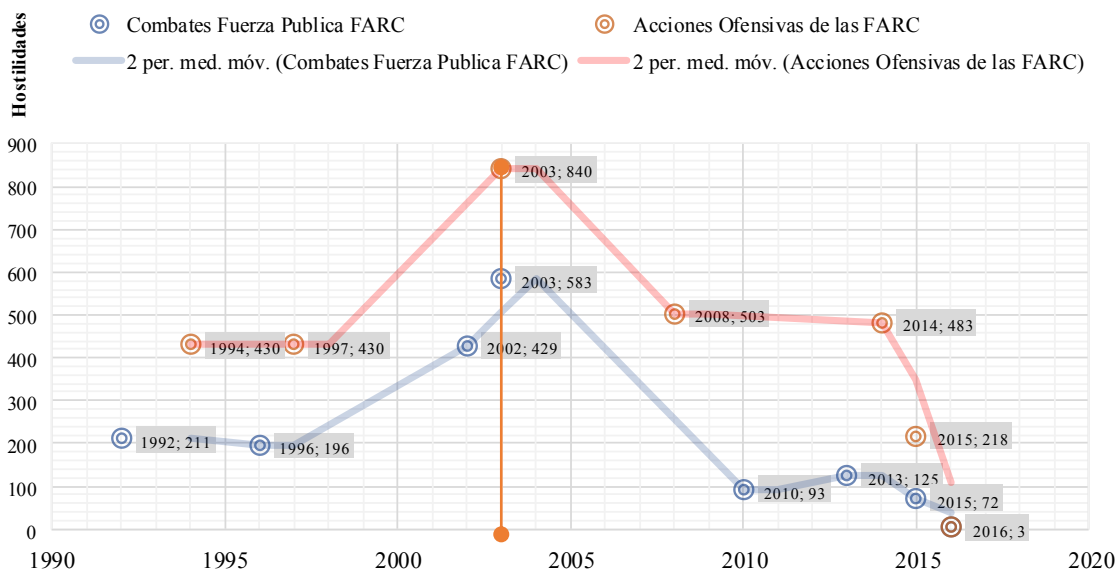


Fuente. De Luis Gabriel Salas. Docente del Departamento de Geografía de la UNC. Magíster en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Geografía de la

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Geógrafo de la Universidad de Nariño. Conflicto armado y configuración Territorial: Elementos para la consolidación de la paz en Colombia.

Cuadro No. 1. Comparativo acciones ofensivas (Etapa de inflexión de las FARC

Acciones de las FARC y combates con la fuerza publica 1992-2016
Desescalamiento-Etapa de inflexion



Fuente. De elaboración propia. Basado en información del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Acciones de las FARC y combates con la Fuerza Pública.

Las FARC, hasta la novena conferencia y la puesta en marcha del plan Renacer de las masas en 2010, se habían emparentado principalmente con la línea del foquismo⁴³, confiaron más en la fortaleza de la estructura militar insurgente que en la obtención del apoyo popular, que le daría más legitimidad al movimiento. De hecho, los grupos guerrilleros, concentrados en acciones de guerra, se expusieron permanentemente a la acción de las Fuerzas

⁴³ Grupos móviles o focos guerrilleros preparados para atacar fuerzas regulares, propinando a su vez golpes contundentes, emboscadas o efectuar combates ligeros. Poseen el apoyo de la población civil en cuanto a logística, información o personal. La población generalmente está amenazada u obligada a cooperar por lo tanto no es fácil alcanzar la legitimidad bajo esta línea de acción.

Militares, lo cual los llevó a un marcado debilitamiento estratégico. Según Pizarro (2006, p. 196), las FARC se vieron imposibilitadas para acceder al poder por la vía armada llevando el conflicto a una etapa de inflexión.

La figura anterior muestra el punto de escalamiento de las acciones armadas de los grupos guerrilleros de las FARC, alcanzado en el año 2003 su máximo tope 840 actividades hostiles, y 583 combates de las Fuerzas Armadas y de policía contra este grupo insurgente de acuerdo a las estadísticas del CERAC. Es una etapa de inflexión donde la efectividad del aparato armado y otras organizaciones facilitan el debilitamiento de la estructura guerrillera. A medida que los grupos insurgentes se hacían más fuertes, eran más vulnerables a la acción de las tropas del Estado por su exposición directa, pues fueron reducidos significativamente. (Ospina, 2011, pg. 33,34)

Pese a las victorias obtenidas por los insurgentes, la lucha por medio de las armas se convirtió en el fracaso para su plataforma estratégica-operacional trazada. Para 2009 el gobierno alcanzó un salto estratégico basado en acciones armadas y no armadas, acelerando la derrota de los grupos al margen de la ley y alcanzando la mejor sensación de seguridad y paz, fortaleciendo las instituciones democráticas, así como la consolidación social del territorio en beneficio del libre ejercicio del derecho del ciudadano.

Ante todo, sus victorias militares terminaron por carecer de importancia estratégica, pues no habían conquistado el apoyo incondicional de la población, ni la legitimidad necesaria para proseguir con su proyecto insurgente. Se había convertido el grupo insurgente en una poderosa máquina de guerra, su desarticulación con la población hizo perdido el sentido de la lucha armada. El peso de la estrategia cambia cuando ven durante la implantación del plan renacer de las masas, una oportunidad para continuar la lucha por el poder sin las armas, buscando logros por la vía política. Seguramente, esta situación y la constante y contundente actividad del Estado con sus Fuerzas Armadas los obligó a aceptar el proceso de negociación con el gobierno.

Quebrantada su retaguardia estratégica, debilitado el secretariado, asegurada la mayor parte de la infraestructura crítica y debilitada su capacidad mi-

litar, se mejoraron las condiciones de seguridad, dando mayor estabilidad al país. Actualmente, el Estado colombiano le apuntó desde el punto de vista estratégico, a recuperar el Control Territorial, ganar legitimidad de la población y hacer frente de forma decidida contra el flagelo de las amenazas que azotan el país, a la vez volcarse hacia la construcción de paz como nuevo modelo de construcción estatal.

Estrategias de las Fuerzas Militares frente al Control Institucional del Territorio y declive de los grupos insurgentes (2002-2016)

Actualmente, el Estado con sus Fuerzas Militares han recuperado gran parte del territorio donde no hubo interferencia estatal por décadas. Con el presidente Uribe empezó una ampliación en el radio de influencia de los organismos estatales, para reducir el poder de dominio de grandes espacios geográficos al que habían llegado los diferentes grupos armados ilegales.

La inestabilidad por la que pasaba el país sirvió de cuna igualmente, para células criminales trasnacionales, no solo para la explotación clandestina de la diversidad de recursos, sino además para acrecentar la siembra de cultivos ilícitos, el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el secuestro, la extorsión y otras actividades que desarrolla la economía criminal. Entre tanto, estos fenómenos conectados al problema de la insurgencia, continuarán en aumento si no hay una rápida acción estatal, pese a que la insurgencia tiende a desaparecer.

El triunfo sobre la insurgencia se produce en un contexto puntual que gira sobre la base de la voluntad política y profunda evaluación del entorno estratégico. Dado que en Colombia, gobernabilidad, territorialidad e institucionalidad son “[...] legitimidades diferenciadas [...] no son de igual entidad en todo el país” (Cuervo 2007, pg.72). Ahora bien, el enclave para ejercer el poder coercitivo en la mayor parte del territorio fue la población, a través de un nuevo enfoque integral e interorganizacional.

Basado en lo anterior, el gobierno comprendió que el enfoque en cuanto a seguridad debía ser político y sistemático. Sería el desarrollo de habilidades

para acumular poderes, una sumatoria de capacidades direccionadas hacia el objetivo común⁴⁴ de alcanzar el ejercicio efectivo y legítimo de la soberanía. Logrando así, orientar los esfuerzos en términos de capacidades nacionales, considerando el aparato bélico del Estado como mecanismo no aislado del conglomerado institucional.

Varias estrategias de defensa aplicaron un despliegue táctico con un amplio cubrimiento y aplicación del poder coercitivo, midiendo igualmente, la capacidad de autoridad en el interior del territorio. Se lucha por separar las guerrillas de la población, a la vez que otorgan fuertes golpes a este grupo armado insurgente. El 2002 sería el final de un largo aliento a la iniciativa de las FARC⁴⁵, las Fuerzas Militares a través de un proceso de reestructuración con apoyo de recursos provenientes de EEUU reajustaron su capacidad de respuesta.

El Plan Patriota, por ejemplo, realizó la implementación del programa conocido como Soldados de mi pueblo, la política mano dura de Uribe y el Plan Espada de Honor. Que, de la mano de una fuerte modernización y adquisición de equipos, de acuerdo con informes del gobierno, permitió la disminución de crímenes atroces contra la población civil, tal como masacres, toma de poblaciones y desplazamientos forzados, al tiempo que se reduce considerablemente el secuestro, la extorción y se potenció la economía.

En particular el trabajo interorganizacional, como esfuerzo sistemático e integral⁴⁶ se empleó como estrategia para combatir los grupos insurrectos, marcándose dos líneas de acción paralelas y distinguidas. La primera una línea operacional armada decisiva y la segunda, la línea de esfuerzo integral,

⁴⁴ Acción Unificada del Estado

⁴⁵ La guerra de posiciones fue el principio del fracaso de las FARC.

⁴⁶ El laboratorio experimental de la guerra en Corea, discurre en la creación de la doctrina de acción integral, la acción unificada y decisiva en el amplio espectro de las operaciones militares. Ello robusteció las acciones decisivas en diversas regiones de Colombia,

juntas han trazaron el camino de transición al Control Institucional del Territorio (CIT) bajo la dirección estratégica del Plan de Seguridad Democrática⁴⁷.

El direccionamiento principal del esfuerzo armado se centró en las grandes regiones carentes de organismos de control y seguridad Estatal, acompañados a la par de la guerra invisible y mediática de un sin número de instituciones interestatales. De modo tal, la acción decisiva del Estado debió distribuirse proporcionalmente entre áreas de dominio de grupos armados y áreas consolidadas, redefiniendo la ofensiva militar con todo su furor. Pues bien, “la seguridad de la que goza un Estado posee una correlación positiva con el grado de construcción estatal que ha alcanzado” (Ayoob, 1995, p. 21). El gobierno nacional acomodó el enfoque de guerra de contrainsurgencia (COIN)⁴⁸ a la Política de Seguridad Democrática.

Prácticamente, la insurgencia representa la mayor amenaza desde la óptica del escenario irregular en los conflictos armados, permeando el crecimiento institucional y político del Estado en países tercermundistas. Por tal razón, la construcción Estatal en este contexto, parte según Tilly (1995), de eliminar el rival dentro del propio territorio.

Estratégicamente, el gobierno empezó por asegurar las cabeceras municipales y proteger la infraestructura crítica, con prioridad los ejes viales. De acuerdo con la Corporación Observatorio para la Paz (2009, p. 184), inicialmente el despliegue de las Fuerzas Militares se direccionó a casi la totalidad de municipios del país, retomando el control de las principales carreteras.

La iniciativa estratégica en ese contexto redefinió la capacidad militar, al producir resultados estratégicos-operacionales valiosos y sin precedentes en cortos períodos, restableciendo la legitimidad, la estabilidad y desarrollo del país. Entre 2003 y 2010 el gobierno logra atacar la retaguardia estratégica de

⁴⁷ Uribe buscaba la derrota militar de los grupos armados, con la acción militar y abierto al diálogo.

⁴⁸ La doctrina de contrainsurgencia (COIN) tiene sus inicios en los británicos sobre 1890, bajo el concepto de “pequeñas guerras” como nueva forma de guerra en las colonias, pues las tropas regulares lidiaban con enemigos salvajes y poco civilizados que utilizaban tácticas irregulares. Se recomienda ver: *Small Wars: Their Principles and Practice* de Charles Callwell, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1996).

las FARC, abatir un sin número de cabecillas, desmovilizó a 32.000 miembros de las AUC, el número de secuestros se desplomó de 2.123 a 282; la extorsión disminuyó de 2.267 a 1.352 incidentes; los ataques terroristas disminuyeron de 1.258 a 471, los homicidios de 23.523 a 15,459.273, por último, la economía nacional se disparó.

El Plan de Guerra implementado tras la Política de Seguridad Democrática, obstaculizo la naturaleza de la lucha revolucionaria de las FARC, orientada a la toma del poder (Ospina, 2006, p. 1-8). Las afectaciones causadas a la estructura insurgente, los obligo a abandonar áreas claves en la retaguardia.

La ofensiva contundente de las FFMM provoca el declive de las FARC hasta el 2010, donde la organización terrorista entra en una etapa de recondicionamiento. Existe en este período la visibilidad del poder militar del Estado, su estrategia dentro del marco de transición a la estabilidad tiene más del 50% de las operaciones militares enmarcadas en la notoria acción ofensiva.

Cuadro 2. Marco de transición a la estabilidad: 2002 a 2010

Acción Integral		Trabajo de Interinstitucionalidad con enfoque cooperativo a la unidad de esfuerzo. Batalla invisible.
Ofensiva 50%	Defensiva 20%	El peso mayor lo tienen el esfuerzo armado con más del 70% entre tareas ofensivas y defensivas. La acción ofensiva materializada con la Campaña del sur, Operación TH, Operación Destructor, Operación Libertad, Jaque y Camaleón entre las más destacadas.
	Acción. Civil 15%	
	Estabilidad 15%	La guerra no armada lleva el peso en el apoyo a la autoridad civil y un esfuerzo mínimo en tareas de estabilización en áreas consolidadas.

Fuente propia. De acuerdo a información documental de la política de seguridad, política de seguridad democrática, política integral de seguridad para la consolidación, Planes de guerra Patriota, Consolidación y Bicentenario.

Hasta el período de re-direccionamiento estratégico en 2010 y el restablecimiento de los diálogos, las FARC difícilmente habían avanzado en la con-

secución de los objetivos estratégicos. La dinámica de la guerra se volcó a favor del Estado en su esfuerzo por tener el Control Institucional Total del Territorio, estableciendo las condiciones del objetivo político.

Este laboratorio experimental, hoy por hoy permite desarrollar planes de guerra integrales y consolidados, con instrucciones delimitadas y metodologías muy claras que constituyen sin duda alguna, un referente para todos los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. A pesar de todo, éstas aún deben consolidar esa conquista total hacia la aceptación del pueblo, para lo cual se necesitan, en el escenario del pos-conflicto, ir más allá de los pequeños núcleos poblacionales, por lo tanto, se deben afinar las estrategias de comunicación frente a la sociedad como un todo.

Igualmente, ganar corazones y mentes se ha convertido en una línea de esfuerzo máximo hacia la población, así como para ganar la voluntad del adversario. Por eso, en el nuevo escenario, para las Fuerzas Militares de Colombia y para el conjunto del Estado, las ideas más que las balas, serán claves para ganar la población y la voluntad del enemigo. En la población está el poder requerido para el Control Institucional del territorio, maximizando los recursos que facilitan el colapso del enemigo.

Todo lo anterior se constituye en un salto estratégico al deseo de construcción de paz con los grupos insurgentes durante el gobierno del presidente Santos, pues durante la administración de Uribe pese a que los grupos armados fueron doblegados, fue imposible concretar una agenda para negociar la paz. Sin embargo, existió una continuidad de la Política de Seguridad Democrática durante el período Santos, aunque en el 2011 fue reemplazado por la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial, siguió preservando algunos elementos importantes del plan inicial.

Con el propósito de la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT), de proporcionar las condiciones para la paz en aquellos territorios estratégicos para el desarrollo económico y social afectados por años de violencia, las Fuerzas Militares han experimentado más el acercamiento a las comunidades, favoreciendo el establecimiento de poderes democráticos fuer-

tes, la adecuación de proyectos de infraestructura vial, establecimiento de vías de comunicación terrestres, aéreas y marítimas, igualmente, al aprovechamiento de arterias hídricas, mejoramiento de capacidades portuarias y una efectiva interconexión de estos con líneas de comunicación hacia el centro.

No obstante, la continuidad de la violencia es un común denominador a través de los tiempos pese a grandes esfuerzos de los gobernantes por mantener la paz. Es de entender que, “Ninguna paz es perfecta. La violencia pública nunca es eliminada completamente. Por lo tanto, deberíamos considerar la paz como un espectro que va de lo seguro a lo inseguro” (Binkerhoff, citado por Rodríguez, 2015. p.4). Por lo tanto, las reformas deberán ir encaminadas a mantener la legitimidad, la credibilidad y la confianza de totalidad de la población en las instituciones del Estado.

Por lo que el Estado no debe desviar la mirada al proceso desde el principio hasta el final, particularmente desde lo local y regional. Lo cual no quiere decir que los grupos se vuelvan a rearmar, por el contrario, pueda suceder un proceso de mutación de la violencia, como sucedió en el Salvador, donde “El fin de la guerra no implicó una disminución en los índices de violencia [...] mientras que alrededor de 6250 personas murieron anualmente por causa de la guerra, en el período de la posguerra los homicidios ascendieron a 8019 en 1986 a 8281 en 1998 [...]” (Vesga, citado por Rodríguez W. F. 2015, pg.11)

Entre tanto, las fuerzas estatales y la institucionalidad deben reforzar las actividades cívico-militares en los procesos de consolidación territorial, sobre las áreas rurales. “[...] pueden jugar un papel de gran importancia en labores asociadas con la rehabilitación y reconstrucción del país con miras a facilitar su desarrollo socioeconómico” (Castaño, 2002). Un proceso que genere nuevas oportunidades para la población civil, favorezca el desarrollo y el progreso, así como un proceso que motive a jóvenes y excombatientes a buscar nuevos rumbos que no sean los de las armas.

Sobre este punto es importante resaltar que a la vez que se generan procesos de acompañamiento a la consolidación de paz, se garantiza la seguridad,

habiendo mayor participación comunitaria e interacción con la sociedad civil. De ahí que se deba prestar importancia a los riesgos que se generan durante el postconflicto en materia de seguridad, para que de esta manera se logre evitar la recaída en nuevas espirales de violencia, pues el riesgo de volver a la guerra siempre estará latente durante las primeras etapas del posconflicto (Collier, Hoefler A. & Soderbom M. 2008, p.461-478). Es por eso que la construcción de la paz es el primer paso en el control institucional del territorio.

Por otro lado, la acción decisiva debe tener igualmente un enfoque hacia el papel que juega la estructura militar respecto al problema de narcotráfico en una época sin conflicto armado interno. “[...] en el que muy posiblemente continuarán operando poderosos grupos de narcotraficantes y otras manifestaciones del crimen organizado [...] cuya capacidad desestabilizadora y de generación de violencia puede ser comparable a aquella de los actuales grupos armados al margen de la ley” (Erazo 2012, pg. 24)

Las Fuerzas Militares deberán participar en un proceso que genere nuevas oportunidades para la población civil, favorezca el desarrollo y el progreso, así como un proceso que motive a los jóvenes a buscar nuevos rumbos que no sean los de las armas.

Dinámica de los procesos de paz en el país

El conflicto interno en Colombia como se ha visto en el análisis dinámico de su naturaleza misma, nace en el albor de la erosión de la autoridad y la autonomía del Estado como unidad política soberana. Ahora bien, bajo el contexto del conflicto interno⁴⁹ han existido ocho tentativas de paz, sin sumar los procesos de paz que preceden el inicio de la confrontación armada⁵⁰.

⁴⁹ Desde 1964 con el nacimiento de las FARC.

⁵⁰ El Gobierno Militar es la primera tentativa de paz en Colombia en el siglo XX: la paz entre guerrillas liberales y Gobierno. Al asumir el gobierno el General Rojas Pinilla, inició un periodo de alivio frente a la irreconciliable postura de conservadores y liberales generada desde 1940 y materializada en una guerra civil no declarada. El gobierno de Rojas Pinilla otorgo la libertad incondicional a todos los guerrilleros que rindieran sus armas, el resultado un efecto positivo con masivas desmovilizaciones. Propone así amnistiar delitos políticos y cobijó con esa medida a todos los colombianos, excluyendo a los militares desertores que se habían alzado en armas y a quienes hubieran cometido delitos atroces -Crímenes con extrema

El siguiente cuadro muestra la memoria histórica de los procesos de negociación de paz, incluidos los llevados durante el conflicto armado en Colombia, entre ellos se distinguen los directamente relacionados con las FARC:

Tabla 12. Memoria de las negociaciones de paz en Colombia

MEMORIA DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ EN COLOMBIA			
Período	Año	Proceso de Pacificación	Síntesis de aborto del proceso
Mariano Ospina Pérez	(46 al 50)	Gobierno de unidad Nacional en pro a la pacificación. Junto con el período de Laureano se pueden considerar procesos de pacificación que preceden a los llevados durante el conflicto armado desde los años 60. Buscaba a través de la creación de agentes legitimados como grupos paramilitares calmar las bases de violencia generada por conservadores y liberales. Estas fuerzas de tipo policial trata-	Se agudiza la confrontación bipartidista, generándose el deceso de Jorge Eliecer Gaitán, el Bogotazo y la activación de guerrillas liberales enfrentando grupos paramilitares conservadores. El conflicto se extendió en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle, Viejo Caldas, Antioquia y otras regiones. Entre los años 1948 y 1949 se generalizaron las polémicas partidistas entre el conservatismo en el poder y el liberalismo en la

insensibilidad moral-. Las guerrillas liberales que entonces operaban en Tolima, los Llanos, y otras regiones del país, decidieron desarmarse y acogerse al beneficio, que estaría acompañado del retorno de los desplazados al campo. Igualmente, el Frente Nacional se puede considerar la segunda tentativa de paz en Colombia en el siglo XX: la paz entre liberales y conservadores.

		ron de apaciguar esta sangrienta división. Mediante decreto 3513 se declaró turbado el orden público y Estado de sitio de la nación.	oposición.
Laureano Gómez	(50 al 53)	Gómez por su simpatía hacia el régimen hitleriano propuso una junta militar para pacificar al país. Al tiempo, promueve una Asamblea Nacional Constituyente modelo de regímenes fascistas europeos, bajo el argumento de la resistencia al comunismo.	Sus propuestas fueron rechazadas tanto por liberales como conservadores. Su aspiración en el régimen de corte corporativo de la dictadura de Franco alimentaba un sistema autoritario presidencial. “Según Parson (1997, Pg. 519) buscó protagonizar la creación de un autoritarismo bajo el todo poderoso. Fue acusado por la oposición de recurrir a medidas absolutistas e implementar la represión contra liberales y comunistas.
Gustavo Rojas Pinilla	(53 al 56)	El Gobierno Militar es la tentativa de paz más grande y primera del siglo XX. Marcó la Paz definitiva entre guerrillas liberales y Gobierno. Puso fin a una era de vio-	Pese a la política de no más sangre, hubo la negativa a negociar con las guerrillas comunistas. Las tierras habían quedado en manos de conservadores y ante la tentativa de devolverlas empezaba una nueva ola de

		lencia entre conservadores y liberales. Con las garantías políticas que ofreció, la entrega de guerrilleros se hizo rápida y en masa, tan solo en seis meses había desmovilizado los grupos armados. Surgen los pactos de Sitges y San Carlos entre liberales y conservadores, una vez derrocado el gobierno de Rojas para fijar y viabilizar el frente nacional.	violencia. Algunos municipios se alzaban nuevamente en armas, por lo que su pacificación no fue completa, es el caso de los municipios de El Carmen de Apicalá, Melgar, Cunday, Venecia y Panday. Allí fue enviado el Batallón Colombia, con el supuesto de enfrentar el comunismo. De modo que en diciembre de 1956 los guerrilleros del partido comunista resolvieron “trasladarse con familias a regiones del Duda y Guayabero para abrir esas tierras y formar el primer Ejército de liberación nacional, marchando [...] al sur de Tolima y norte de Cauca para seguir combatiendo.” (Londoño 2011, pg. 559)
Alberto Lleras Camargo	(58 al 62)	Nacimiento del frente nacional como estrategia de colaboración bipartidista y segunda tentativa de paz en el siglo XX. Se distingue este período por la política de alianza para el progreso. Representó la paz entre liberales	Surgen terceros partidos, con movimientos como el MRL y la ANAPO, quienes no son bien acogidos por liberales y conservadores, generando para mala fortuna inconformismo y rupturas políticas. Condiciones que dan origen a nuevos

		y conservadores. Durante este período se impulsó el proyecto de reforma agraria, atendiendo los derechos de los campesinos, dando un vuelco al manejo de la tierra con la creación del INCORA, al tiempo que apoyo la educación, apoyando igualmente la inserción de guerrilleros acogidos al proceso de paz.	grupos insurgentes, del MRL se desprende el M-19 y de la ANAPO el ELN. Aunado a lo anterior, el triunfo de la revolución cubana y la supuesta derrota militar de EEUU en Vietnam, fortalecen el sentimiento comunista, a lo que se le suma el asesinato del líder comunista Jacobo Prias Alape, haciendo que guerrilleros de la época de la violencia se alzarán nuevamente en armas contra el gobierno, ubicándose en Marquetalia lugar donde murió Prias Alape y génesis del nuevo conflicto interno. Siguiendo a Molano (2015) En las décadas de los 60s y los 70s el movimiento agrario de fuerte acento comunista plantó sus raíces colonizadoras sobre el piedemonte de la cordillera oriental, el Macizo Colombiano, el Magdalena medio y Urabá, enraizando a pasos agigantados diferentes frentes guerrilleros. Posteriormente, el gobierno de Guillermo León Valencia buscó diezmar los grupos guerrilleros, y en su
--	--	--	--

			afán por recuperar las repúblicas independientes, ejecutó la Operación Marquetalia y declaró el Estado de sitio. Utilizó el apoyo de EEUU implementando el plan Lazo, así como acciones cívico-militares, para consolidar el territorio. Al tiempo durante el período de Lleras Restrepo y Misael Pastrana la reforma agraria pierde credibilidad, tomando mayor auge el M-19 con el robo de la Espada de Bolívar. Del mismo modo empieza el crecimiento de las FARC. Sobre 1974 Lopez Michelsen criminaliza jurídicamente los grupos disidentes, reprimiendo con el imperio de la ley los elementos subversivos.
Julio César Turbay Ayala	(78 al 82)	El proceso de amnistía de Cesar Turbay sería. La posible tercera tentativa de paz en Colombia en el siglo XX Durante su período de gobierno quiso un acercamiento con las FARC, fracasando en el intento.	Su gobierno represivo contra la protesta social hizo que sus iniciativas de pacificación con el proceso de amnistía no fueran bien recibidas. Además, el ex presidente Lleras Restrepo quien dirigía la comisión de acercamiento a las FARC

		Ofreciendo amnistía a los alzados en armas que para los rebeldes no ofrecía las condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso. Este intento de acercamiento a los grupos rebeldes sería entonces el primero en el nuevo conflicto interno armado.	renuncio pues no había garantías claras que facilitarían ese proceso.
Belisario Betancur Cuartas	(82 al 86)	El inicio de las Negociaciones con las FARC durante su período. Es el cuarto intento en la búsqueda de la paz en el siglo XX y segundo durante el conflicto armado. Con la ley de amnistía para los alzados en armas, creando la Comisión nacional de paz e inició dialogo con los grupos guerrilleros. Nace entonces la Unión Patriótica de los diálogos Gobierno FARC.	Al considerar que el gobierno pretendía su desmovilización, ningún grupo guerrillero se desmovilizó. Se inició persecución de los miembros de la UP generando una ola de asesinatos por parte de grupos paramilitares, al tiempo que el Ejército incrementa las operaciones militares contra las guerrillas. Acontecimientos que no favorecen al proceso.
Virgilio Barco	(89 al 90)	El proceso de dejación de armas, e indulto para el EPL, M-19 y Quintín Lame es la quinta tenta-	Continúa la ola de asesinatos de miembros de la UP, así como de candidatos presidenciales entre los

		tiva de paz en Colombia en el siglo XX y tercero en el conflicto interno. Las guerrillas del M-19, EPL y Quintin Lame se acogen al indulto y la nueva ley de amnistía, dicha ley cobijaba delitos políticos y conexos, excluyo homicidios fuera de combate y actos de ferocidad y barbarie. Facilitando la dejación de armas. Al tiempo se impulsó la nueva constituyente en el 91.	años 1987 y 1990, entre ellos Carlos Pizarro, Pardo Leal, Jaramillo Osa y Luis Carlos Galán. De igual forma, paramilitares y narcotraficantes masacran campesinos y niños en Trujillo Valle y Córdoba, donde también se ven involucrados miembros de la fuerza pública.
César Gaviria	(91 al 94)	Se efectúan los Diálogos de paz de Tlaxcala. Considerados como la sexta tentativa de paz en Colombia y cuarta en el conflicto armado. En su mandato se finiquita el proceso de desmovilización del Movimiento Quintin Lame, materializándose de igual forma la realización de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ejecutándose el proceso de paz de Tlaxcala con los miembros de la Coordinadora nacional	Se rompen los diálogos de paz con el secuestro del ex ministro Argelino Duran por parte del ELN, especialmente por su muerte en cautiverio en 1992.

		Guerrillera, conformada en ese entonces por FARC, ELN, EPL. Antecede la ejecución de la Operación Casa Verde contra las FARC, permitiendo retomar conversaciones.	
Ernesto Samper	(94 al 97)	Las aproximaciones al ELN, EPL y las FARC. Son la séptima tentativa de paz en Colombia en el siglo XX y quinta durante el conflicto interno. Por medio de la ley buscaba el camino para la paz, abarcando las medidas facilitadoras del diálogo con las guerrillas, amnistía e indulto. Así como el intento de negociar con las FARC a través de la Comisión de Conciliación Nacional. Resultado de ello, se acogió de forma clandestina el ELN.	Sobre 1998 el ELN había firmado el borrador, pero se rompe el proceso por el mal manejo de los medios de comunicación al salir a la luz pública. Por otro lado, continuaron las masacres masivas de los grupos paramilitares, al tiempo acontece el asesinato de Álvaro Gómez.
Andrés Pastrana	(98 al 02)	El proceso de paz con las FARC en el Caguán, es la octava tentativa de paz en Colombia en el	No hubo claridad respecto a lo que se quería negociar. Se centró en el mantenimiento de la zona de dis-

		siglo XX y sexta durante el conflicto interno. El proyecto de amnistía convertido en ley de Belisario Betancur favoreció las negociaciones en el Caguán. Se desmilitariza una amplia zona territorial del tamaño de Suiza. Se dio paso a la agenda llamada “Política de Paz para el Cambio”. Se declaró a su vez el proceso de negociación con el ELN mediante resolución No. 83.	tención para la continuidad de los diálogos. Hechos como el secuestro del avión de Avianca, el secuestro del ex congresista Luis Eduardo Guechem y la continuidad de las actividades delictivas entre ellas los ataques y toma a poblaciones opacaron el proceso dando por finalizadas las conversaciones con las FARC en 2002. Por otro lado, las arbitrariedades de los grupos paramilitares, así como los golpes propiciados al ELN y ante la imposibilidad de acceder a las demandas del ENL rompe los diálogos de igual forma con este grupo subversivo.
Álvaro Uribe Vélez	(02 al 10)	El proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa, y el intento de aproximación a las FARC. Es la novena tentativa de paz en Colombia, y la séptima durante el conflicto. La política mano dura de Uribe, garrote y zanahoria. Favoreció la desmovi-	Después de la búsqueda a un acercamiento con los grupos guerrilleros inicio una ofensiva total contra los grupos guerrilleros. Bajo la concepción de amenaza terrorista, los catalogo con apoyo extranjero de narco terroristas. Al tiempo se cuestionó la desmovilización de las

		lización de los grupos paramilitares, llevando de igual forma, a las FARC a un declive que coadyuvo al presidente Santos en su proceso de dialogo con las FARC. Además, hizo intentos de buscar diálogos con las FARC y el ELN, pero no fueron efectivos. Aprobó también la ley de Justicia y paz con los paramilitares y liberó docenas de guerrilleros buscando la liberación de rehenes. Ofreció garantías considerables para negociar con el ELN y las FARC.	Autodefensas, apareciendo también el fenómeno de BACRIM. Tenciones con sus vecinos amenazaron su legitimidad, y favorecieron a los insurgentes desde el exterior, surgiendo además el escándalo de los mal llamados falsos positivos.
Juan Manuel Santos	(10 al 16)	El proceso de dialogo con las FARC mediante la agenda para paz estable y duradera, bajo la luz de la décima tentativa de paz en Colombia en el siglo XXI, es la octava a nivel de conflicto interno armado. El inició de la salida negociada de las partes en conflicto en Cuba, es el resultado de una fase secreta de aproximaciones	Entre 2012 y 2013 el proceso de paz de Santos tubo una mayoría de aceptación. “A diciembre del 2012, el 75% de los colombianos aprobaba la decisión del presidente Santos de iniciar el proceso de Paz (El Espectador, 2012). En diciembre de 2013, el nivel de apoyo al proceso de paz era del 68% de los colombianos. (prensa libre, 2013). Después del plebiscito y

		hacia alcanzar un posconflicto. con los resultados inesperados de las partes, tanto FARC como Gobierno buscan salvar el proceso. Actualmente hay una gran expectativa, respecto a las conversaciones, aunque para algunos miembros de la oposición no es factible. Hay fuerte compromiso de las partes por sacar adelante el proceso, que a su vez a recibido todo el apoyo a nivel internacional. Pese a que se presentaron hechos violentos durante el cese al fuego de las FARC, que amenazaron el proceso, hasta ahora se han limado las asperezas, buscando la continuidad de los acuerdos.
--	--	---

Gráfico de elaboración propia: Basado en las siguientes fuentes documentales: “Colombia, ¿La guerra de nunca acabar? de Manuel Gerdám y Rubén Darío Ramírez, así como Negociaciones de paz en Colombia 1982-2013 documento resumen de Álvaro Villarraga Sarmiento.”

De acuerdo a lo anterior, de las ocho tentativas de paz en el conflicto interno armado iniciado en Colombia sobre 1964, siete relacionan al grupo guerrillero de las FARC, aunque el primer acercamiento lo quiso hacer Turbay Ayala finalizando la década de los 70s, el primer acuerdo lo llevo a cabo el mandatario Belisario Betancour.

El tiempo es testigo de cómo diferentes gobiernos han querido negociar la paz con las guerrillas insurgentes. Buscando disminuir la intensidad de las hostilidades, mediando entre las partes para alcanzar el posconflicto, “[...]”

fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto. [...] supone una recomposición de la sociedad [...]” (Gómez 2003 Pg. 130). Los primeros acuerdos con las FARC los inicia el presidente Belisario Betancour Cuartas en 1983, con el acuerdo de la Uribe; destacándose a su vez los acuerdos de Corinto en 1984, pactados con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL), bases de su sometimiento⁵¹ en el último año del período de gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-90) y su continuidad con el mandato de Cesar Gaviria, mientras las FARC continuaron con la guerra de insurrección.

Con el gobierno de Gaviria se puso fin al proceso de negociación de Corinto. Se sometieron definitivamente varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, el EPL y el Movimiento Indígena de Liberación Quintín Lame. Por el contrario, las FARC y los grupos paramilitares continuaban creciendo militar y económicamente.

Por otro lado, Ernesto Samper Pizano entre (1994-1998) fracasó en condiciones de oportunidad para la negociación con todos los grupos guerrilleros. García (2009), señaló que durante su período de gobierno Samper estuvo a punto de llevar a cabo negociaciones definitivas con los alzados en armas incluyendo las FARC, no obstante, al verse salpicado por el proceso 8000⁵² y la crisis política, rompió las negociaciones. Los esfuerzos por buscar la paz continúan en los períodos de gobierno subsiguientes, con Pastrana, Uribe y el actual mandatario el presidente Santos.

Con el gobierno de Pastrana las FARC llegaron fuertes a la mesa en el Caaguán, esta guerrilla quería demostrar que estaban en el proceso no por su fortaleza ni por agotamiento de su esfuerzo militar. González (2002, Pg. 17), señaló que las FARC mostraron la fuerza antes de la negociación, no habían cedido por debilidad. Por lo tanto, para este grupo en particular, solo se dejarían las hostilidades si se daban las reformas sociales, lo cual llevó a la ruptura de diálogos.

⁵¹ El M-19, el movimiento Quintín Lame y el EPL inician su proceso de desarme y desmovilización mediante el consenso del indulto y posibilidad de retomar la vida política.

⁵² Samper fue acusado de recibir para su campaña financiación del cartel de Cali.

Posteriormente, el período de Uribe se distingue por la lucha frontal contra las guerrillas de las FARC y la desmovilización de los grupos paramilitares. No hubo alcances efectivos en cuanto a la búsqueda de diálogos con los grupos guerrilleros, pese a que paralelamente al proceso de conciliación con grupos de autodefensas, se quiso buscar en cierto grado un acercamiento a estos los grupos insurgentes. Según Fisas (2010) una comisión conciliadora de la Iglesia con las FARC y grupos paramilitares fue autorizada por Uribe para iniciar diálogos en una zona de encuentro de aproximadamente 150 km en una zona rural de encuentro.

Al parecer nunca obtuvo respuesta alguna de los miembros de las FARC, solo hasta la subida al poder del presidente Santos se logran alcances significativos. Este gobierno mostro un decidido interés por solucionar el conflicto armado, más que continuar la ofensiva militar que se estaba dando a lugar, haciendo un vuelco a la política exterior en Colombia.

Ahora, en el momento histórico que vive el país, es clave revisar los elementos que posibilitan el logro del proceso de construcción de paz, asociados al Control Institucional del Territorio. De acuerdo con Dubois citado por Cárdenas (2014), construir la tan anhelada paz larga y duradera, no será posible si se descuidan los componentes de desarrollo humano, es decir, la esperanza de vida, salud, educación y satisfacción de necesidades para lograr una vida digna.

No obstante, en los tiempos actuales existe el proceso de mutación de las guerras de contrainsurgencia tradicionales, donde la guerra por el poder y el dominio de la población se empieza a quedar en el pasado. Apareciendo un nuevo fenómeno denominado *convergencia de los fenómenos criminales*, en Colombia definido en el plan Victoria a partir de “amenazas híbridas” (CREI 5, 2016). Donde posiblemente en el territorio estas nuevas amenazas buscarán ocupar las llamadas zonas grises⁵³ y sus objetivos son más que el poder, fines económicos.

⁵³ Espacios donde la corrupción busca desestabilizar la acción del Estado y los actores ajenos a la institucionalidad se debaten entre la legalidad e ilegalidad.

La población dejara de ser el Centro de Gravedad de los conflictos de ahora. Ante esta situación, es imperante la pronta acción del Estado con la institucionalidad en todos los rincones del territorio, pues es necesario atacar estos fenómenos de inestabilidad de raíz y desde el primer momento. Así no tendremos que esperar otros cincuenta años para negociar con los nuevos actores no estatales, y que con la globalización afectan no solo el interior de los Estados, sino además la totalidad del sistema internacional.

En tanto que sobre las áreas donde se ha centrado el conflicto, mientras no exista la acción efectiva del Estado, empezarán a robustecerse nuevas amenazas como la criminalidad transnacional, el tráfico ilícito de armas y municiones, el incremento del narcotráfico, el tráfico de migrantes, entre otras relacionados con el deterioro del medio ambiente, la explotación ilegal de recursos, etc. Por ende, el Estado colombiano requiere una explotación vigorosa de oportunidades, así como una herramienta alentadora frente a los nuevos desafíos, entre ellos los llamados nuevos factores de inestabilidad como el *Crimen Transnacional Organizado (CTO)*. Pues la criminalidad transnacional no es solo un fenómeno latinoamericano, sino que además se vislumbra en todo el continente, convirtiéndose en una de las emergentes amenazas de los Estados contemporáneos (Wagner, 2010, pg.47).

Conclusiones

La presencia de las Fuerzas Militares en el post-conflicto debe ser mayor en el territorio. No debe haber en ningún rincón un municipio donde no estén las Fuerzas Militares y de policía. Se debe dar un gran salto estratégico que vaya más allá de la defensa del orden constitucional en el territorio, a consolidarse como garantes en el apoyo a actividades de protección a los habitantes, progreso regional y seguridad territorial “pasar de una acción de defensa de los intereses del Estado ante una amenaza del enemigo interno- la insurgencia armada-, a ser un organismo que minimiza las vulnerabilidades del Estado, evitando que se generen nuevos factores de violencia”. (Álvarez, García & Madrigal, 2015, p.153).

Entre tanto, la superación del conflicto armado va más allá de las negociaciones de paz, donde el Control Institucional del Territorio es necesario frente al fortalecimiento estatal. Pues bien, el sostenimiento de la acción contra las urgencias políticas, económicas y sociales no se puede quedar en la noción de paz, más cuando son persistentes y deben ser superadas. Por ello, evitar la errónea idea de concebir el ocaso de una larga trayectoria de violencia interna, en términos del fin del conflicto interno.

La efectividad del Control Institucional del Territorio (CIT) es marcada en el cumplimiento de los objetivos de consolidación y estabilización, como mecanismo para la construcción de paz. Ello implica la articulación institucional, la optimización de recursos y empleo efectivo de medios sobre las áreas de atención prioritaria. De modo que el Control Institucional del Territorio no implica un detrimento en el monopolio de la fuerza, por el contrario, el Estado debe aplicar no solo el uso legítimo de la fuerza, sino además tener el monopolio de la justicia, la economía, el control del territorio y la población.

De modo que los grandes logros militares y políticos alcanzados desde las dos décadas anteriores hasta la fecha, exigen igual atención buscando la revitalización para el fortalecimiento estatal. Ante su desatención, se seguirá cimentando la infraestructura de los crecientes factores de inestabilidad, pues mientras la legitimidad institucional siga siendo una deuda reivindicada en algunas fracciones del territorio, quedará en tela de juicio la conquista de la tan anhelada paz.

